

## **LA JUDICATURA ANALIZADA POR LOS PRESIDENTES DE LA CORTE SUPREMA**

VEINTICINCO AÑOS DE PETICIONES INCUMPLIDAS

**Enrique Navarro Beltrán**

El presente estudio analiza la opinión de la propia judicatura, a través de los discursos inaugurales del año judicial en los últimos veinticinco años, acerca de las causas que motivan las críticas hacia la administración de justicia y, particularmente, las medidas tendientes a hacerla más eficaz. Al decir de los jueces, los males de la justicia provienen fundamentalmente de elementos externos a la judicatura, por lo que bastaría la acción decidida de la autoridad política para solucionarlos. Así, entre las medidas fundamentales propuestas que permitirían con mayor eficiencia “darle a cada uno lo suyo” se mencionan el aumento del número de tribunales, la autonomía económica a través de la asignación de un porcentaje del presupuesto nacional, el aumento de las remuneraciones de los jueces, la creación de una Escuela Judicial —para la formación de los magistrados— y de una Policía Judicial que dependa directamente de la judicatura y —en fin— la dictación de un sinnúmero de reformas legales tendientes a agilizar los procesos y adecuar las normas sustantivas a las nuevas realidades.

Asimismo, se consigna aquí el parecer de los Presidentes de la Corte Suprema sobre diversas materias de interés para la judicatura, como

---

ENRIQUE NAVARRO BELTRÁN. Abogado. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, U. de Chile. Profesor de Derecho Constitucional en las Facultades de Derecho de las Universidades de Chile y Finis Terrae. Autor de diversas publicaciones sobre Derecho Constitucional e Historia Institucional.

son su independencia, su visión de la modernidad, el rol que le ha cabido en la defensa de los derechos de las personas, como también sus relaciones con las demás instituciones nacionales, en especial con los gobiernos de turno y, en general, el análisis de otros tópicos de carácter institucional.

*“La justicia debe ser como la inmóvil roca en medio del mar siempre agitado, a la cual se recogen los que, combatidos por la tempestad, buscan en ella su salvación y contra cuya base se estrellan siempre las embravecidas olas sin conmoverla.”*

(Tomás Pablo, ex Presidente del Senado, Tercera Convención Nacional de Magistrados, Concepción, 1970.)

Desde 1919, el Presidente de la Corte Suprema da cuenta anualmente de la labor realizada en el año anterior por la judicatura, de las dudas y dificultades en la inteligencia y aplicación de las leyes y de los vacíos que noten en ellas.

En el discurso inaugural de 1993, el actual Presidente, Marcos Aburto Ochoa, ha señalado que desde fines de la década del sesenta se ha venido produciendo una sistemática campaña de desprestigio y desinformación en contra del Poder Judicial, que ha tenido su punto culminante en la reciente acusación constitucional dirigida contra un integrante de dicho máximo tribunal.

Actualmente se habla mucho de una supuesta crisis de la judicatura y consecuentemente de una reforma a la misma, por lo que resulta interesante analizar lo expresado por los Presidentes de la Corte Suprema en los últimos veinticinco años, que es el período desde el cual el actual Presidente ha señalado que ha venido produciéndose dicha campaña de desprestigio.

El artículo 102 del Código Orgánico de Tribunales prescribe:

El primer día hábil de marzo la Corte Suprema iniciará sus funciones en audiencia pública, a la cual deberán concurrir su fiscal y los miembros y fiscales de la Corte de Apelaciones de Santiago.

El Presidente de la Corte Suprema dará cuenta en esta audiencia:

- 1° Del trabajo efectuado por el tribunal en el año judicial anterior;
- 2° Del que haya quedado pendiente para el año que se inicia;
- 3° De los datos que se hayan remitido al tribunal por las Cortes de Apelaciones en conformidad al artículo 90, N° 9, de la apreciación que le mereciere la labor de estos tribunales y de las medidas que a

su juicio o a juicio del tribunal fuere necesario adoptar para mejorar la administración de justicia, y

4° De las dudas y dificultades que hayan ocurrido a la Corte Suprema y a las Cortes de Apelaciones en la inteligencia y aplicación de las leyes y de los vacíos que se noten en ellas y de que se haya dado cuenta al Presidente de la República en cumplimiento del artículo 5° del Código Civil.

Esta exposición será publicada en el *Diario Oficial* y en la *Gaceta de los Tribunales*.

La Corte Suprema procederá en seguida al sorteo de los miembros que deben formar las salas en que el tribunal debe dividirse.

El presente estudio tiene por propósito analizar los discursos pronunciados por los diversos Presidentes de la Corte Suprema durante el período 1967-1992, esto es, durante los últimos 25 años.<sup>1</sup>

El objeto no es otro que escuchar la voz de la propia judicatura en relación a la realidad judicial nacional y a las tantas veces aludida “crisis judicial”.

Tal como lo señala el Artículo 102 del Código Orgánico de Tribunales, aludido precedentemente, los discursos inaugurales del año judicial abarcan tres grandes temas:

- a) estadísticas de la labor realizada;
- b) las dudas y dificultades en la inteligencia y aplicación de las leyes, y
- c) los vacíos que se noten en las leyes.

El estudio comprende cuatro grandes capítulos.

En el primero se analizan las medidas tendientes a mejorar la administración de justicia y que, en opinión de la judicatura, son fundamentalmente de resorte de los demás poderes del Estado.

En el segundo se estudian materias de interés general relativas a la judicatura, como ser su independencia, su postura frente a la modernidad y al tema de los derechos humanos, su relación con otras entidades, etc.

Con posterioridad, se tratan materias de carácter institucional atinentes a la judicatura, como la carrera judicial, la jornada laboral, la previsión, etc.

Por último, se hace referencia a la relación entre la judicatura y los regímenes de gobierno durante el período que abarca el estudio.

---

<sup>1</sup> Sobre la materia existe escasa bibliografía. Véanse Gonzalo Vicente Molina, “La Memoria Anual del Presidente de la Corte Suprema (1919-1976)”, tesis Facultad de Derecho, Universidad de Chile, 1976; Gastón Gómez B., “Corte Suprema: Análisis de algunos de sus comportamientos”, en *Gaceta Jurídica*, N° 82 (1987), pp. 15-35.

En los anexos se resume parte de la labor efectuada por la Corte Suprema en el último cuarto de siglo.

## I. MEDIDAS PARA MEJORAR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

### 1. 1. Aumento del número de tribunales

Todos los Presidentes de la Corte Suprema en sus discursos inaugurales han insistido en la necesidad de aumentar el número de tribunales como medida indispensable para obtener un mejoramiento en la administración de justicia.

Ya en 1968 Osvaldo Illanes manifestó su conformidad con la creación de nuevos tribunales en las provincias de Rancagua y Colchagua.

Posteriormente, en 1970, Ramiro Méndez consigna la evidente carencia de juzgados en número suficiente para hacer frente debidamente a la delincuencia, la que se acrecienta de manera significativa en la época.

Tres años después, Enrique Urrutia M. celebra la creación de nuevos tribunales, puesto que en su opinión un mayor número de ellos haría más expedita la administración de justicia. En 1975 reitera la misma idea al expresar “debería procederse a la creación de juzgados en número conveniente para la población que sirven, es decir, tener juzgados con un trabajo relativo, no abrumador como ocurre hoy en algunos de esta ciudad y así conseguir el ideal de muchos juzgados con poco personal, lo que además evita que la justicia se diluya y se obtiene que sean los propios jueces los que la administren”;<sup>2</sup> por último propone la creación de 30 tribunales del crimen en Santiago, como un mecanismo para paliar dicho déficit.<sup>3</sup>

Al año siguiente su sucesor, José María Eyzaguirre, vuelve a señalar la necesidad de aumentar el número de juzgados del crimen, especialmente en Santiago, idea que reiterara en 1978 al proponer la creación de por lo menos 30 juzgados del crimen en Santiago.

Por su parte, Israel Bórquez, en 1979, al igual que todos sus predecesores, señala que el factor decisivo para lograr el mejoramiento de la administración de justicia es aumentar el número de jueces. En 1982 reitera nuevamente este planteamiento y sentencia “lo ideal es que haya jueces en número suficiente y con pocos empleados que laboren en las actuaciones

---

<sup>2</sup> Discurso Inaugural de 1975, *Diario Oficial*, de 14-3-1975, p. 7.

<sup>3</sup> Sólo recientemente, por ley N° 19.156, publicada en el *Diario Oficial*, de 10-8-1992, se aumentaron de 26 a 36 los tribunales del crimen de Santiago, diecisiete años después de haber sido solicitados por la judicatura.

investigatorias. Sólo así desaparecerá la delegación de funciones, la intervención será directa y el control se ejercerá responsablemente para obtener una eficaz, rápida y recta administración de justicia”.<sup>4</sup>

Resumiendo las ideas anteriores sentencia que: “Mejorar la justicia, pues, será crear o acrecentar los organismos que la imparten”.<sup>5</sup>

Complementando lo anterior, en 1988 señala que uno de los males de la judicatura es la demora en las decisiones, pero que ella radica “en la escasez de personal más que en la complejidad de los procedimientos. Si el número de jueces fuese suficiente, la rapidez en la decisión resultaría normal, siempre que la tendencia beligerante en la población fuese sana”.<sup>6</sup> Aumentando el número de letrados no se recurriría a la delegación de facultades en el personal de Secretaría para darle curso a la tramitación de las causas y de esta manera el juez tendría un control directo con el proceso.

En 1989, Luis Maldonado expresa que una de las medidas indispensables para agilizar la administración de justicia es “crear juzgados en las localidades en que este tribunal así lo ha solicitado reiteradamente”.<sup>7</sup> Por último, un año después, propone doblar el número de juzgados del crimen en Santiago y crear tribunales letrados de paz en materia vecinal.

Como puede observarse, la Corte Suprema ha considerado de manera unánime que la principal causa de los males de la judicatura radica en la falta de tribunales suficientes para resolver los asuntos controvertidos y de esa manera evitar la delegación de funciones por parte del juez en el personal de Secretaría. Se afirma que en la medida que existan jueces en cantidad suficiente, éstos podrán abocarse eficientemente a la resolución de los conflictos y de esta manera darle a “cada uno lo suyo”.

## 1. 2. Autonomía económica

Este tema fue abordado por la unanimidad de los Presidentes del máximo tribunal y constituye para la judicatura un elemento indispensable para el mejoramiento y modernización de la misma.

En efecto, ya en 1967, el entonces Presidente, Osvaldo Illanes, señala que “no queda otra solución que este Poder Público tan trascendente en la vida social tenga una autonomía económica. La tiene hoy la Universi-

---

<sup>4</sup> Discurso Inaugural de 1982, *Diario Oficial*, de 15-3-1982, p. 20.

<sup>5</sup> Discurso Inaugural de 1985, *Diario Oficial*, de 14-3-1985, p. 16.

<sup>6</sup> Discurso Inaugural de 1988, *Diario Oficial*, de 14-3-1988, p. 14.

<sup>7</sup> Discurso Inaugural de 1989, *Diario Oficial*, de 14-3-1989, p. 13.

dad de Chile, con mucha más razón un Poder del Estado. No es, por tanto, una cosa difícil de obtener. Basta la buena voluntad de los otros Poderes. La esperamos con anhelo”.<sup>8</sup>

Posteriormente en 1970 su sucesor, Ramiro Méndez, expresa que es indispensable otorgarle la autonomía económica al Poder Judicial tal como la tiene el Poder Legislativo y algunos otros organismos. De esta manera la autonomía constitucional de que goza el Poder Judicial “no será plena y verdadera —señala— mientras la autonomía jurisdiccional no se complete con la económica”.<sup>9</sup>

Lo anterior también fue reiterado en 1973 por Enrique Urrutia M. al consignar la importancia de dicha autonomía para el mejor funcionamiento del Poder Judicial.

José María Eyzaguirre considera, en 1976, que la autonomía es el fundamento necesario e indispensable para obtener la independencia y progreso de la judicatura. A objeto de implementar la misma, propone asignar al Poder Judicial el 1% del total de gastos del Estado, tanto en moneda nacional como extranjera.<sup>10</sup>

A su vez, en 1989, Luis Maldonado vuelve a reiterar lo anteriormente señalado en su discurso respectivo que “no es posible hablar de poder independiente si, a más de la heterotutela, uno de ellos —de los Poderes del Estado— se ve disminuido frente a otros, teniendo que aceptar que una pequeña cantidad de dinero conforme su presupuesto de cada año. La autonomía económica —se ha dicho por muchos de mis antecesores— es uno de los fundamentos más vitales de la independencia de la magistratura”.<sup>11</sup> Dicha idea la vuelve a consignar tanto en 1990 como en 1991.

De esta manera se aprecia la unanimidad de pareceres expresados por la Corte Suprema en el sentido de otorgarle autonomía al Poder Judicial tal como a los demás poderes del Estado. Sólo Israel Bórquez, en su discurso de 1979, se manifestó contrario a dicha idea expresando que le parecía “muy compleja la ruta de la autonomía económica; difícil de planificar y más aún de administrar”.<sup>12</sup>

La autonomía económica ha sido y es un deseo prácticamente unánime expresado por la judicatura, petición que no ha sido escuchada por los demás Poderes Políticos. Dicha falta de reacción por parte de los gobiernos

---

<sup>8</sup> Discurso Inaugural de 1967, *Diario Oficial*, de 14-3-1967, p. 11.

<sup>9</sup> Discurso Inaugural de 1970, *Diario Oficial*, de 14-3-1970, p. 6.

<sup>10</sup> Piénsese que, de acuerdo al presupuesto de 1992, el Poder Judicial recibió sólo un 0,5% del mismo, similar al del Congreso Nacional.

<sup>11</sup> Discurso Inaugural de 1989, *Diario Oficial*, de 14-3-1989, p. 13.

<sup>12</sup> Discurso Inaugural de 1979, *Diario Oficial*, de 14-3-1979, p. 14.

de turno puede tener como causa la circunstancia de que usualmente se ha asimilado la judicatura a una mera repartición pública o a un organismo más de la administración del Estado, visión tal vez heredera del desprecio del constitucionalismo francés decimonónico a la judicatura, que redujo a esta última a su mínima expresión.<sup>13</sup>

### 1. 3. Aumento de remuneraciones de los jueces

Existe un tema en el cual hay unanimidad de pareceres por parte de la judicatura.

La totalidad de los Presidentes del máximo tribunal, sin excepción, han reiterado la necesidad urgente de aumentar las remuneraciones de los magistrados acorde con la dignidad y naturaleza de sus funciones. Indudablemente la judicatura ha sido postergada y se le ha asimilado a un servicio público más, desconociéndosele su naturaleza de Poder del Estado.

Osvaldo Illanes, en sus tres discursos, solicita una mejoría para la judicatura. Señala, ya en 1967, que éste es un problema que viene arrastrándose por más de treinta años. Para graficar la situación, confirma que un juez de departamento “gana menos que una taquígrafa de una oficina administrativa o empresa particular”.<sup>14</sup> Lo anterior es grave si se piensa que, por una parte, existe incompatibilidad para el ejercicio de otro cargo retribuido y que, por otra parte, las remuneraciones de los jueces están estrechamente vinculadas con su independencia.

Con posterioridad, en 1972, Ramiro Méndez reitera su preocupación sobre el tema. “La carrera judicial —señala— ha estado postergada en las preocupaciones de los gobiernos. No ha existido interés por compensar adecuadamente a quienes la siguen”.<sup>15</sup>

Al año siguiente, Enrique Urrutia M. señala que una de las causas de la falta de interés por ingresar a la magistratura consiste en que las rentas de esta última “no han podido competir con las que ofrecen otros organismos fiscales o semifiscales, cuyos abogados, por lo general, además de sus

---

<sup>13</sup> Véase Enrique Navarro Beltrán, “La judicatura chilena del absolutismo ilustrado al Estado constitucional. De la Real Audiencia a la Corte de Apelaciones de Santiago”, memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Santiago de Chile, 1988.

<sup>14</sup> Discurso Inaugural de 1967, *Diario Oficial*, de 14-3-1967 p. 11. Hoy día la situación es levemente superior, aunque puede afirmarse que la remuneración de un juez es equivalente a la de una secretaria bilingüe privada.

<sup>15</sup> Discurso Inaugural de 1972, *Revista de Derecho, Jurisprudencia y C. Sociales*, N° 69 (1972), p. XVI.

rentas, gozan del privilegio de ejercer libremente la profesión”.<sup>16</sup> Crítica, a su vez, la disposición que limita la remuneración de los miembros de los tribunales superiores de justicia a 20 sueldos vitales, por cuanto dicho cercenamiento podría ser estimado inconstitucional en razón de que indirectamente estaría vulnerando la inamovilidad de los jueces.

José María Eyzaguirre, en 1977, llama la atención sobre la circunstancia de que no exista relación de proporcionalidad entre las remuneraciones de los jueces y la de los auxiliares de la administración de justicia.

Israel Bórquez, por su parte, en 1979 señala que la única solución que requiere el Poder Judicial para atraer a buenos postulantes no es otra que aumentar las rentas de los jueces, compatibles con la importancia de su función y sin parangón con los demás servicios públicos. Lo anterior requiere, según el Presidente Bórquez, del restablecimiento de la escala de sueldos del Poder Judicial tal como existía antes de la dictación del DL 249 de 1979. Dicha idea la reitera en 1980 y 1983.

Años después, en 1988, Rafael Retamal resalta la importancia del oficio del juez, para el cual hay que tener —afirma— vocación de sacrificio, sin la esperanza de una remuneración que la compense.

Por último, Luis Maldonado también aborda el tema, considerando indispensable un aumento de las remuneraciones, acorde con la función trascendental que desempeñan los jueces y como un mecanismo para hacer realmente efectiva la independencia de la judicatura.

Debe recordarse que, tanto en 1969 como en 1989, parte de la judicatura estuvo en huelga ilegal (la primera comprometió incluso a los jueces), como único mecanismo desesperado para hacer valer a la autoridad su postergación económica, situación que fue criticada estoicamente en su momento por los Presidentes del máximo tribunal de la época. Es evidente que no se ha dado a la judicatura una verdadera solución en materia de remuneraciones acorde con su función y dignidad. El hecho es indesmentible y adquiere caracteres de dramatismo en ciertas localidades, donde además los jueces carecen de las comodidades mínimas para el desempeño de sus funciones; por otra parte, la situación también es desmedrada en relación a los otros poderes del Estado; así, hoy día un juez de la República gana diez veces menos que un parlamentario, incluidas todas sus asignaciones.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Discurso Inaugural de 1973, *Revista de Derecho, Jurisprudencia y C. Sociales*, N° 70 (1973), p. XIV.

<sup>17</sup> Como un paralelo a la situación que vive otro poder del Estado en materia de remuneraciones, véase Enrique Navarro Beltrán, “La dieta parlamentaria en Chile: Antecedentes histórico-institucionales y su consagración en la Constitución de 1980”, *XXIII Revista de Derecho, Jurisprudencia y C. Sociales* (Concepción, 1992).



### 1. 4. Escuela Judicial

Uno de los temas recurrentes lo constituye la necesidad de crear una Escuela Judicial.

En 1968 Osvaldo Illanes desarrolla latamente esta materia, con especial referencia a la experiencia en tal sentido vivida tanto en España como en Italia. Dicha Escuela debe pensarse —de acuerdo al alto magistrado— sobre la base de un curso universitario que empiece en cuarto año de Derecho y que tenga una duración bianual.

Dicho curso debe tener un contenido teórico (estudios sobre Sociología, Psicología, Historia, Filosofía Jurídica y Humanista, etc.) y una práctica. Esta última debe realizarse durante el primer año en los tribunales de primera instancia y posteriormente en la Corte de Apelaciones y Corte Suprema durante seis meses, respectivamente. Por último, la licenciatura del futuro magistrado abarcaría tanto las disciplinas de juez como la de abogado.

Dos años después, Ramiro Méndez señala que dicha Escuela Judicial sería una muy buena solución para estimular el interés de los jóvenes universitarios por ingresar a la carrera judicial. Se refiere en especial a un proyecto elaborado por una comisión, en la que formó parte durante 1964, y en el cual se propone más que la creación de un Instituto autónomo como en España o Francia —que parecería impracticable— la implementación de cursos breves en las Escuelas de Derecho como un mecanismo tendiente a perfeccionar el ingreso a la carrera judicial.

Con posterioridad, en 1980, Israel Bórquez se manifiesta también partidario de dicha Escuela, instando a la Universidad de Chile —que un año antes había inaugurado el Magíster de Derecho Judicial— a que estableciera de manera definitiva la Escuela de Jueces, pero con la particularidad que ésta debería orientarse hacia los abogados recién ingresados, o sea, debería tratarse de una Escuela “de jueces” y no de una Escuela “para jueces”; lo anterior fundado en la circunstancia de que los magistrados no pueden abandonar largamente sus labores, por cuanto ello podría ocasionar graves entorpecimientos en la administración de justicia.

En sentido diverso, Luis Maldonado manifiesta en 1989 que resulta indispensable crear una Escuela de Jueces no sólo para los jueces de primera y segunda instancia, sino también para los colaboradores de la administración de justicia. Sobre el particular señala: “Imagino tal escuela no sólo para que se capacite en forma práctica a los postulantes para cargos judiciales o aquellos funcionarios recién nombrados —magistrados de primera y segunda instancia—, sino también para actualizar la formación legal

de aquellos que ya pertenecen al Poder Judicial, ayudándoles así a éstos a encontrar nuevos estímulos para mantener el fervor capaz de destruir la rutina”.<sup>18</sup> Se trata de una escuela orientada a todos los que puedan estar interesados en la carrera judicial, esto es, a los que aspiran a jueces, a los magistrados propiamente tales, como a todos los colaboradores de la judicatura. En 1990 vuelve a reiterar la necesidad de crear una Escuela Judicial, añadiendo que ello podría ser un paliativo a la excesiva proliferación de Escuelas de Derecho en el país.

Como puede apreciarse no existe absoluta claridad sobre la naturaleza de la mencionada Escuela Judicial y tampoco sobre su ámbito de acción. Algunos la piensan como cursos previos para ingresar a la carrera judicial; otros, como cursos de perfeccionamiento destinados a los magistrados y colaboradores de la administración de justicia. Parece necesario, en realidad, una exposición más sistemática y clara sobre la mencionada materia y sobre la conveniencia y necesidad práctica de la misma.<sup>19</sup>

### 1. 5. Policía Judicial

Especial interés ha despertado en la judicatura la necesidad de crear una Policía Judicial dependiente exclusivamente del Poder Judicial, como mecanismo para hacer realmente efectivo el cumplimiento de la tercera fase jurisdiccional, cual es la de ejecutar las resoluciones judiciales. Tres Presidentes han tratado esta materia en períodos diversos.

En 1973, Enrique Urrutia M. señala la necesidad de crear “un cuerpo de detectives dedicados únicamente a la función judicial”.<sup>20</sup> Ello resultaría indispensable —en su opinión— para hacer frente eficazmente al aumento de la delincuencia y además ayudaría a hacer efectiva la independencia de los tribunales. Dicha idea la reitera un año después, agregando que dicha Sección o Departamento debiera depender de las Cortes de Apelaciones respectivas, sin perjuicio de la supervigilancia de la Corte Suprema. No cabe duda que estas opiniones están fuertemente influidas por la circunstancia de que en dicho período la autoridad administrativa negó injustificadamente el auxilio de la fuerza pública, haciendo en la práctica ineficiente la labor de la judicatura.

---

<sup>18</sup> Discurso Inaugural de 1989, *Diario Oficial*, de 14-3-1989, p. 14.

<sup>19</sup> Sobre el tema de la Escuela Judicial, véase Germán Hermosilla A., “Capacitación judicial”, *El Mercurio*, 28-1-1993, A2.

<sup>20</sup> Discurso Inaugural de 1973, *Revista de Derecho, Jurisprudencia y C. Sociales*, N° 70 (1973), p. XVIII.

Rafael Retamal, en 1988, vuelve sobre el tema, consignando la necesidad de crear una Policía Judicial, designada y controlada exclusivamente por la judicatura, como un modo de hacer más efectiva la labor de la justicia criminal.

Por último, en 1990, Luis Maldonado señala que es notoria la falta de una Policía Judicial, “ya que actualmente los servicios que colaboran en la pesquisa de los delitos y proporcionan la fuerza pública dependen del Ministerio de Defensa, quedando la magistratura sin injerencia en la dirección, organización o funcionamiento de ellos”.<sup>21</sup> Dicha falta —concluye— afecta la autonomía funcional del Poder Judicial.

Puede apreciarse, entonces, que en general existe acuerdo y cierta unanimidad de pareceres en cuanto a la conveniencia de la creación de un ente que investigue los delitos y haga efectivo el cumplimiento de las resoluciones judiciales. En todo caso, no se aprecia una descripción clara sobre la naturaleza y características de la misma.

### **1. 6. Agilización de la justicia** (Participación de servicios colaboradores)

La judicatura ha recibido continuamente críticas en torno a la lentitud de la misma. La Corte Suprema ha señalado, en relación a este punto, que las causas de la supuesta lentitud deben encontrarse en factores ajenos al Poder Judicial y que no están a su alcance.

En 1970, Ramiro Méndez señala que existe desconfianza en relación a la eficacia de la justicia para descubrir y sancionar a los culpables de los delitos y que hay clamor público por el aumento de la criminalidad. Sin embargo, dicha situación —expresa— no es de responsabilidad exclusiva de los magistrados, por cuanto faltan juzgados en número suficiente, como —además— medios modernos de investigaciones y servicios policiales adecuados.

Años después, Enrique Urrutia M. desarrolla con latitud el tema de la lentitud judicial, expresando que ésta es más aparente que real, por cuanto ello se debe a causas extrañas al sistema judicial. “Se olvidan los que hacen críticas de lentitud —señala— que la justicia debe marchar con funcionarios e instituciones auxiliares, peritos, investigadores, extraños a su vigilancia directa [...]; no se cuenta con los últimos adelantos de movilización, comunicación..., que los jueces que los sirven aún no tienen medios

---

<sup>21</sup> Discurso Inaugural de 1990, *Diario Oficial*, de 14-3-1990, p. 17.

propios de movilización”.<sup>22</sup> Agrega que nuestra justicia no es la más lenta y para criticar la lentitud de la administración de justicia debe tenerse presente la máxima de “apresúrate lentamente”. Como solución adicional, propone la creación de una Policía Judicial, según ya se ha analizado. Llevando al plano práctico lo anterior, Israel Bórquez señala en 1982 que de un estudio realizado experimentalmente en un juzgado del crimen de Santiago se puede concluir inequívocamente que la demora en la tramitación de las causas es responsabilidad fundamental de los organismos auxiliares colaboradores de justicia (v. gr. Carabineros, Investigaciones, Registro Civil, Instituto Médico Legal, etc.), quienes cumplen sus funciones con mucho retardo.

Por último, Rafael Retamal reiterando la idea anterior consigna en 1985 que una de las medidas indispensables para el mejoramiento de la justicia es que los organismos administrativos cumplan efectivamente y sin demora lo que los jueces les ordenen ejecutar.

De esta manera se desprende que, de acuerdo al sentir de la judicatura, las causas de la supuesta lentitud de la administración de justicia tienen su origen en factores externos —en particular en relación a la rapidez de los servicios colaboradores— más que en los propios jueces. Ello por cierto es más aplicable a la judicatura criminal.

### 1. 7. Tribunales vecinales

Durante el gobierno socialista del Presidente Allende se discutió un proyecto de ley en donde se establecían tribunales no letrados destinados a conocer de las cuestiones de orden vecinal.

En 1971, Ramiro Méndez critica el proyecto tanto desde el punto de vista de la naturaleza de jueces —no letrados— como por el mecanismo de su elección —sufragio universal—; sobre esto último afirma que “la elección unánime no transformaría al profano en técnico” y por otra parte “¿la elección popular sería realmente una mejor garantía de la independencia de la judicatura?”.<sup>23</sup> Al año siguiente reitera sus aprensiones en relación al tema. Sobre el punto señala “los llamados tribunales vecinales o populares, en cuanto su objetivo consiste en que la mayoría ciudadana pueda acudir a la justicia letrada para que le resuelva gratuitamente sus problemas con

---

<sup>22</sup> Discurso Inaugural de 1973, *Revista de Derecho, Jurisprudencia y C. Sociales*, N° 70 (1973), p. XVII.

<sup>23</sup> Discurso Inaugural de 1971, *Diario Oficial*, de 13-3-1971, p. 14.

eficiencia y rapidez, son absolutamente necesarios [...]. Este concepto de justicia popular lo propugno. Pero niego que sea necesario crear jueces no letrados, porque serían estos los verdaderos jueces y en vez de un solo funcionario encargado de la justicia habría dos: uno útil e inútil el otro”.<sup>24</sup> A objeto de solucionar lo anterior propone “[...], crear cierto número de jueces en los departamentos que determine la Corte Suprema [...], establecer normas sencillas de procedimiento para juzgar los casos y crear un sistema adecuado para que los jueces puedan trasladarse diariamente o ciertos días de la semana a los poblados rurales y en un local que estaría obligado a proporcionar la Municipalidad o cualquiera de los organismos fiscales que funcionan en todos ellos, para oír a los interesados y recibir sus pruebas, en caso que se le presente. Del fallo se dejaría testimonio en un libro de sentencias y allí mismo firmarían las partes para significar su conocimiento de ella”.<sup>25</sup>

Por su parte, sobre la misma materia, Enrique Urrutia M., en 1974, expresa: “No creemos que los juzgados vecinales, aunque sean servidos por letrados, sean la solución. Es necesario que el juez del crimen atienda los problemas de ordinaria ocurrencia entre los vecinos. Estos jueces tendrán un mejor dominio de conocimientos aun domésticos para las soluciones de los asuntos que deban de resolver”.<sup>26</sup>

Por último, Luis Maldonado, en 1990, en contradicción a lo afirmado por sus predecesores, propone, como una manera de hacer llegar la justicia a todos los rincones y estratos sociales de la nación, la creación de tribunales letrados de paz, los cuales “deberían crearse en las ciudades, barrios, poblaciones o sectores de ellas o en los centros rurales, industriales, mineros, y dotados de un muy simple y directo procedimiento se ocuparían del conocimiento de algunas causas civiles, comerciales, y del trabajo, de las acciones descritas por los artículos 941 y 942 del Código Civil y de algunas faltas, todos hechos que, por su poca monta e importancia social, generalmente no son conocidos por los actuales tribunales”.<sup>27</sup>

Como puede verse, salvo esta última opinión, el máximo tribunal, a través de sus representantes, ha considerado innecesaria la creación de juzgados vecinales de paz, estimando más conveniente que dichas materias sean entregadas al conocimiento de los jueces ordinarios, aunque con procedimientos breves y sumarios.

---

<sup>24</sup> Discurso Inaugural de 1972, *Revista de Derecho, Jurisprudencia y C. Sociales*, N° 69 (1973), p. XIX.

<sup>25</sup> *Ibidem*, pp. XIX-XX.

<sup>26</sup> Discurso Inaugural de 1974, *Diario Oficial*, de 14-3-1974, p. 17.

<sup>27</sup> Discurso Inaugural de 1990, *Diario Oficial*, de 14-3-1990, p. 17.

## 1. 8. Necesidad de efectuar reformas legales

Se aprecia unanimidad por parte de la judicatura en señalar que el mejoramiento de la justicia debe lograrse mediante reformas legales, esto es, mediante la ejecución de actos ajenos a la esfera propia de cada uno de los jueces.

En 1971, Ramiro Méndez consigna que “los defectos de la justicia —ya lo hemos dicho— son los que corresponden a toda obra humana, pero muchos —la casi totalidad— los puede corregir el legislador mediante leyes adecuadas”.<sup>28</sup>

En términos similares, Enrique Urrutia M., en 1973, expresa que “como el pueblo se inclina a la licencia y los jefes a la arbitrariedad, corresponde entonces a los estadistas —y no a los jueces— bregar por la creación y dictado de leyes adecuadas al estado y condición de aquellos que deben cumplirlas, para así hacer menos odiosa su aplicación y evitar que los que dirigen rebasen sus atribuciones”.<sup>29</sup> De esta manera —se concluye— que cualquier mejoramiento de la administración de justicia depende del legislador y del ejecutivo.

Con posterioridad, en 1985, Rafael Retamal también consigna dicha idea, en cuanto a que los mejoramientos dependen del legislador. Sin embargo, al año siguiente establece un límite al poder de reforma legal en cuanto que “las reformas legislativas no deben originarse en la antigüedad de las leyes. Sólo si éstas son ineficaces o si los servicios que están regidos por ellas no prestan a la comunidad la protección adecuada, sólo entonces caben y son lógicos los cambios”.<sup>30</sup>

Por último, en 1992, Enrique Correa insiste en dicha postura al señalar que “la ley la dicta el poder político: Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, y ellos dicen lo que es justo, sin que le sea permitido al juez discutir o dudar de la justicia que la ley encierra, y los jueces sólo aplican este concepto de justicia y no el suyo que pudiera ser filosóficamente diferente”; por eso —concluye— “si se cree que doctrinariamente se administra mala justicia, debe ocurrirse al poder político pidiendo una justicia más justa para que los jueces apliquen esta justicia más justa”.<sup>31</sup> Sobre el punto, no debe olvidarse que si bien es cierto que el juez debe someterse estrictamente a la ley, también es cierto que, tal como lo señalara el propio Portales, los buenos jueces hacen buenas las malas leyes.

---

<sup>28</sup> Discurso Inaugural de 1971, *Diario Oficial*, de 14-3-1971, p. 13.

<sup>29</sup> Discurso Inaugural de 1973, *Revista de Derecho, Jurisprudencia y C. Sociales*, N° 70 (1973), p. 13.

<sup>30</sup> Discurso Inaugural de 1987, *Diario Oficial*, de 14-3-1987, p. 11.

<sup>31</sup> Discurso Inaugural de 1992, *Diario Oficial*, de 17-3-1992, p. 10.

De los discursos pronunciados en los últimos veinticinco años se deducen diversas proposiciones de modificaciones, tanto legales como constitucionales.

#### 1. 8. 1. Modificaciones orgánicas

##### *Relativas a la Corte Suprema:*

- a) En la confección de las quinas para el nombramiento de Ministro de la Corte Suprema debería incluirse solamente por antigüedad a un solo miembro y no dos (1976).<sup>32</sup>
- b) Aumentar en cuatro los miembros de la Corte Suprema, totalizando veintiuno (1990).
- c) Rechazo a la idea propuesta en el sentido de que en el nombramiento de los Ministros de la Corte Suprema participe el Senado, por cuanto politizaría la judicatura (1992).

##### *Escalafón judicial:*

- a) Apertura del mismo a abogados ajenos a la judicatura (1974, 1980 y 1983).<sup>33</sup>
- b) Otorgarle suficiente movilidad (1975).
- c) Establecer límites de edad mediante la incorporación de un precepto constitucional en tal sentido (1970 y 1975).<sup>34</sup>

##### *Sistema de calificaciones:*

- a) Necesidad de que las Cortes de Apelaciones fundamenten de manera objetiva las calificaciones (1978).
- b) Necesidad de que las calificaciones no sean secretas (1990).

---

<sup>32</sup> De acuerdo al artículo 75 inciso 2° de la Constitución ocuparía un lugar en la quina que se confeccione para el nombramiento de los Ministros y Fiscales de la Corte Suprema “el Ministro más antiguo de la Corte de Apelaciones que figure en la lista de méritos”.

<sup>33</sup> El artículo 75 inciso 2° de la Constitución permite que en la confección de quinas de integrantes de la Corte Suprema puedan “figurar personas extrañas a la administración de justicia”.

<sup>34</sup> De acuerdo al artículo 77 inciso 2° de la Constitución de 1980, “los jueces cesarán en sus funciones al cumplir 75 años de edad”. Dicha norma “no regirá respecto de los magistrados de los tribunales de justicia en servicio a la fecha de vigencia de esta Constitución”, según lo prescribe la disposición octava transitoria de la misma.

*Relativas a las Cortes de Apelaciones:*

- a) Aumentar miembros de las Cortes de Apelaciones (1990).
- b) Necesidad de crear una Corte de Apelaciones en Pedro Aguirre Cerda (1977 y 1979).<sup>35</sup>

*Abogados integrantes:*

- a) Inconveniencia de que el Senado confeccione ternas de abogados integrantes. Se debe evitar politización de la judicatura (1982 y 1989).
- b) Proposición en el sentido de que los ministros de la Corte Suprema que jubilen integren la terna respectiva para nombramiento de abogados integrantes, aprovechando la experiencia de los mismos (1989).

*Traslados de funcionarios:*

El Poder Ejecutivo debe estar obligado a cursar los traslados solicitados por la Corte Suprema (1976).<sup>36</sup>

*Otras materias:*

- a) Inamovilidad a miembros de la Corte Marcial y Naval, integrada por auditores en retiro (1989).
- b) Crear una Corporación Administrativa del Poder Judicial (1989 y 1990).
- c) Crítica al establecimiento del Consejo Nacional de la Judicatura (1992).
- d) Subrogaciones:
  - Jueces: si no existe Secretario abogado, deberían formarse listas parciales confeccionadas por las Cortes de Apelaciones respectivas, integradas por abogados que reemplazarían temporalmente al juez (1970).

---

<sup>35</sup> La Corte de Apelaciones de Pedro Aguirre Cerda fue creada por DL 2145, publicada en el *Diario Oficial*, de 31-3-1978.

<sup>36</sup> De acuerdo al artículo 77 inciso 4° de la Constitución, “el Presidente de la República, a propuesta o con acuerdo de la Corte Suprema, podrá autorizar permutas u ordenar el traslado de los jueces o demás funcionarios del Poder Judicial a otro cargo de igual categoría”.



- Fiscales de las Cortes de Apelaciones: se propone su reemplazo por el Secretario del tribunal, y por el más antiguo si existe más de uno, sin necesidad de designación expresa, dejándose sólo testimonio del hecho en el libro de Decretos Económicos del Tribunal (1970).
- e) Competencia de justicia militar: reducir su esfera de acción (1989 y 1990).
- f) Auxiliares de la administración de justicia:
  - Archivo Judicial: introducir mecanismos de incineración y microfilm (1968 y 1969).
  - Procurador del Número: revisar su régimen previsional (1970 y 1971).
  - Auxiliares de la Corte Suprema: reemplazados por empleados dactilógrafos permanentes (1973).
  - Sistema de Notariado: modernización (1976, 1977 y 1978).<sup>37</sup>
  - Establecimiento de un Conservador General en Santiago (1987).

#### 1. 8. 2. Modificaciones procesales

##### *Procedimiento en general:*

- a) Características en general: evitar exceso de formalismos (1967); abreviarlos (1967); establecer tres tipos de procedimientos: ordinario, ejecutivo [cumplimiento del fallo] y sumario [asuntos de urgencia] (1988); compensar rapidez con justicia (1969); y aumentar iniciativa de los tribunales para actuar de oficio (1967).<sup>38</sup>
- b) Resoluciones dilatorias:  
Ministros visitadores deben vigilar el exceso de providencias dilatorias de los jueces (1977); sancionar al que pierda dos o más recursos dilatorios (1988).<sup>39</sup>

<sup>37</sup> La ley 18.181, publicada en el *Diario Oficial*, de 26-11-1982, modificó la normativa aplicable a los notarios contenidas en el título XI, párrafo 7 del Código Orgánico de Tribunales (arts. 399 al 445).

<sup>38</sup> La ley 18.705, publicada en el *Diario Oficial*, de 24-8-1988, aumentó en alguna medida la iniciativa de los tribunales.

<sup>39</sup> El art. 88 del Código de Procedimiento Civil, modificado por la ley 18.705, señala en su inciso 1° que “la parte que haya promovido y perdido dos o más incidentes en un mismo juicio, no podrá promover ningún otro sin que previamente deposite en la cuenta corriente del tribunal la cantidad que éste fije”.

*Procedimiento penal:*

- a) Restituir el Ministerio Público en primera instancia (1967 y 1969). Sin embargo, tanto en 1975 como en 1987, ello no se estima necesario, puesto que ocasionaría más retardo en los juicios.<sup>40</sup>
- b) Inconveniencia de la creación de jueces instructores y sentenciadores (1976 y 1987).<sup>41</sup>
- c) Modernización de medios probatorios (1967 y 1976).
- d) Crítica a modificación del artículo 6 y 158 del CPP, relativo a diligencias en recintos militares (1979 y 1984).<sup>42</sup>
- e) Regulación de la duración del Sumario (1967).

*Notificaciones:*

- a) Autorizar notificación personal en cualquier lugar, no exigiendo el trámite de habilitación previa (1984).
- b) Conveniencia de que la notificación por el estado diario se exprese en número y no en letras (1984).

*Sentencia:*

- a) Modificar requisitos formales de la sentencia, resumiéndolos (1984).
- b) Establecer fundamentación lacónica en la sentencia que deseche un recurso de apelación o casación (1988).
- c) En la sentencia de casación debe hacerse una simple mención de que la sentencia está de acuerdo a la ley (1984).
- d) Introducir recurso de queja especial destinado exclusivamente para el caso de retraso en la dictación del fallo, tal como lo contempla el Código de Minería (1989).<sup>43</sup>

---

<sup>40</sup> El DL 426, publicado en el *Diario Oficial*, de 3-3-1987, suprimió los cargos de promotores fiscales “por no ser indispensables”, con lo cual desapareció el Ministerio Público en primera instancia.

<sup>41</sup> En el Código de Justicia Militar sí se estableció dicha distinción.

<sup>42</sup> La ley 19.047, publicada en el *Diario Oficial*, de 31-7-1990, derogó el inciso 2º y 3º del art. 6 del CPP.

<sup>43</sup> El art. 545 del Código Orgánico de Tribunales modificado por la ley 18.969, publicada en el *Diario Oficial*, de 10-3-1990, establece en su N° 1 que los tribunales superiores conocerán del recurso de queja “cuando las resoluciones no fueren pronunciadas dentro de los plazos señalados en la ley”.

*Recursos judiciales:*

- a) Apelación: El escrito de apelación debe contener peticiones concretas (1967).<sup>44</sup>  
El recurso de apelación contra incidentes debe verse en cuenta (1967).<sup>45</sup>  
Reducir suspensiones (1967).<sup>46</sup>
- b) Casación:  
Autorizar casación en el fondo de oficio (1973, 1974 y 1976).<sup>47</sup>  
Eliminar expresión de agravios (1967).<sup>48</sup>
- c) Recurso de queja:  
Limitarlo (1978), para evitar uso abusivo (1989).<sup>49</sup>  
El litigante que pierda por unanimidad debe ser condenado en costas (1976).<sup>50</sup>  
Hacerlo improcedente cuando pueda interponerse casación contra la resolución (1977).  
Aumentar multa cuando se pierda por unanimidad (1985).<sup>51</sup>

<sup>44</sup> El art. 189 de la Constitución, modificado por las leyes 18.705 (*Diario Oficial*, de 24-5-1988) y 18.882 (*Diario Oficial*, de 20-12-1989), establece que el escrito de apelación debe contener peticiones concretas, salvo cuando sea subsidiario del de reposición y este último las tuviera.

<sup>45</sup> De acuerdo al art. 199 inciso 1º del Código de Procedimiento Civil, modificado por la ley 18.882, “la apelación de toda resolución que no sea sentencia definitiva se verá en cuenta, a menos que cualquiera de las partes, dentro del plazo para comparecer en segunda instancia solicite alegatos”.

<sup>46</sup> De acuerdo al art. 165 Nº 5 del Código de Procedimiento Civil, modificado por la ley 18.705 (publicada en el *Diario Oficial*, de 24-5-1988), las partes pueden suspender sólo una vez la vista de la causa de común acuerdo.

<sup>47</sup> El art. 785, modificado por el DL 1.682, publicado en el *Diario Oficial*, de 25-1-1977, estableció la facultad de la Corte Suprema de casar de oficio una sentencia recurrida si se hubiera dictado con infracción de ley y ello hubiere influido substancialmente en lo dispositivo del fallo.

<sup>48</sup> La ley 18.705, publicada en el *Diario Oficial*, de 24-5-1988, eliminó el trámite de expresión de agravios.

<sup>49</sup> La ley 18.969, publicada en el *Diario Oficial*, de 10-3-1990, modificó el art. 545 del Código Orgánico de Tribunales estableciendo causales específicas de procedencia del recurso de queja.

<sup>50</sup> El art. 549 del Código Orgánico de Tribunales reemplazado por la ley 18.705, publicado en el *Diario Oficial*, de 24-5-1988, y modificado por las leyes 18.776 y 18.882, publicadas en el *Diario Oficial*, de 18-1-1989 y 20-1-1989, respectivamente, establece en su inciso 6º que “si el recurso fuese desechado por la unanimidad de un tribunal colegiado se condenará en costas al recurrente y, además, al pago de una multa a beneficio fiscal de hasta 2 UTM”. En su inciso 7º se señala que el abogado patrocinante de un recurso de queja rechazado por unanimidad será sancionado con alguna de las medidas de los números 1, 2, 3 del art. 352 del COT (amonestación, censura y multa) de estimar el tribunal que el recurso ha carecido de todo fundamento o ha sido interpuesto en forma temeraria.

<sup>51</sup> *Ibídem*.

1. 8. 3. Desnaturalización de la Corte Suprema transformándose en tercera instancia por la vía del recurso de queja.

La Corte Suprema manifiesta su especial preocupación por la circunstancia de que en el hecho se ha transformado en un verdadero tribunal de tercera instancia por la vía del aumento excesivo de los recursos de queja y, como contrapartida, por la notable disminución de los recursos de casación tanto en la forma como en el fondo.<sup>52</sup>

José María Eyzaguirre, en 1977, manifiesta su molestia por el uso abusivo que se ha hecho por los abogados del recurso de queja “de modo que se llega a desnaturalizar el rol del tribunal de derecho que corresponde a la Corte Suprema, de acuerdo con el pensamiento del legislador, para llegar a transformarla en una tercera instancia, que nunca se pensó en establecer”.<sup>53</sup> Agrega, luego, que sólo un 4,8% de los recursos de queja interpuestos se han acogido, demostrándose con ello su finalidad fundamentalmente dilatoria que se persigue con su interposición; proponiendo como solución hacerlo improcedente cuando la resolución que la motiva fuera susceptible de ser recurrida de casación.

Rafael Retamal, en 1985, reitera dicha idea central, afirmando que el recurso de queja ha venido a reemplazar al de casación, exigiendo ello un estudio laborioso, por cuanto la decisión comprende tanto los hechos como el derecho. A objeto de aminorar lo anterior propone aumentar la multa cuando el recurso sea rechazado por unanimidad, evitándose así su empleo desmedido.

Como puede verse el máximo tribunal al decir de sus Presidentes se ha ido desnaturalizando y perdiendo su esencia de ser un tribunal de casación, para transformarse en un tribunal de tercera instancia, en parte producto del exceso de formalismo de que ha sido revestido el recurso de casación —circunstancia que se ha pretendido aminorar con las últimas reformas—. <sup>54</sup> Sobre esta materia no debe olvidarse, sin embargo, que la casación es un recurso extraño a nuestro derecho, tanto que cuando entró en vigencia, a principios de siglo, numerosos Ministros de la Corte Suprema se retiraron. En este sentido, la queja, ideada por la propia judicatura, viene a ser una nueva versión del antiguo recurso de justicia notoria del Derecho Indiano,<sup>55</sup> mecanismo exento de formalidades y destinado a hacer justicia y

---

<sup>52</sup> Véase anexo N° 3.

<sup>53</sup> Discurso Inaugural de 1977, *Revista de Derecho, Jurisprudencia y C. Sociales*, N° 74-75 (1977-1978), p. 3.

<sup>54</sup> Ley N° 18.705 (*Diario Oficial*, de 24-5-1988) y 18.882 (*Diario Oficial*, de 20-12-1989).

<sup>55</sup> Véase Enrique Navarro B., *op. cit.*, nota 13.

no a sancionar la infracción de ley, dando a cada uno lo suyo sin recurrir a preciosismos procesalistas.

#### 1. 8. 4. Reforma a Códigos sustantivos

La Corte Suprema, en reiteradas oportunidades, ha manifestado su interés en que los códigos sean modernizados, en especial en materia penal, civil y mercantil.

##### *Código Penal:*

Varios Presidentes del máximo tribunal, en oportunidades diversas, manifestaron su opinión de reformar dicho Código a objeto de adecuarlo a las nuevas realidades. Ya en 1967 Osvaldo Illanes señala que dicho Código es anacrónico y debe ser modernizado (v. gr. modificar el concepto de delito y de participación, revisar las circunstancias atenuantes y agravantes, efectuar una nueva sistematización de los delitos y modificar las normas relativas a la aplicación de las penas y al cumplimiento de las mismas). Similar idea fue reiterada dos años después.

En 1976, el Presidente José María Eyzaguirre expresa la necesidad de modernizar el Código Penal, tomando como modelo el Código Penal tipo para América Latina.<sup>56</sup> Señala, en todo caso, que dichas normas deben estar siempre inspiradas “en el concepto del humanismo cristiano (...) [y por lo tanto] debe concebirse al hombre y a sus derechos fundamentales, como centro de la sociedad”.<sup>57</sup>

Por último, en 1987, Rafael Retamal señala una opinión distinta en esta materia: “El Código Penal (afirma) para el que sabe aplicarlo tiene preceptos tan sabios que cualquier juez puede ser severo o benévolo, según la naturaleza del suceso que juzga, sin transgredirlo mediante el juego limpio de sus preceptos de dolo o culpa y sobre atenuantes y agravantes”, (concluye) “las reformas legislativas no deben originarse en la antigüedad de las leyes. Sólo si éstas son ineficaces o si los servicios que están regidos por ellas no prestan a la comunidad la protección adecuada, sólo entonces caben y son lógicos los cambios”.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Véase *Código Penal tipo para América Latina* (Ed. Jurídica, 1973), 2º volumen.

<sup>57</sup> Discurso Inaugural de 1976, en *Revista de Derecho, Jurisprudencia y C. Sociales*, N° 73 (1976), pp. 18-19.

<sup>58</sup> Discurso Inaugural de 1987, *Diario Oficial*, de 14-3-1987, p. 11.

Debe, a su vez, consignarse que en reiteradas ocasiones la Corte Suprema ha bregado por la modernización del sistema carcelario y penitenciario —1967, 1977, 1980 y 1982— y por la construcción de una nueva Cárcel en Santiago —1974—.

### *Código Civil:*

En 1976, el Presidente de la Corte Suprema, José María Eyzaguirre, señala por primera vez la necesidad de modificar ciertas disposiciones del Código Civil a objeto de ponerlas de acuerdo con las nuevas realidades. Así, por ejemplo, expresa la conveniencia de sustituir el criterio nominalista dominante en el Código Civil, que es manifiestamente injusto e inconciliable con la realidad y con la lógica;<sup>59</sup> modificar las normas de la capacidad de la mujer casada;<sup>60</sup> revisar el concepto de lesión en materia contractual, modernizar la clasificación de las personas jurídicas, actualizar diversas disposiciones legales e introducir los preceptos de innumerables leyes dispersas vinculadas con el Código Civil.

En 1987, Rafael Retamal manifiesta su preocupación por las voces que propugnan modificar el Código Civil, obra más que centenaria. “El Código Civil —señala— no es intocable, pero es respetable porque contiene normas escritas por un sabio que al mismo tiempo de serlo tenía calor humano para expresarse y suprema elegancia, propiedad suma y precisión jurídica inimitable, por eso es digno de respeto y para tocarlo ha de elegirse a alguno que se acerque cualitativamente a la altura de su autor. Ojalá que hallemos precisamente el que es necesario”.<sup>61</sup>

### *Código de Comercio:*

Quien desarrolla esta materia es José María Eyzaguirre. “El Código de Comercio —afirmaba en 1976— debe ser objeto de esenciales reformas

---

<sup>59</sup> El art. 25 del DL 455, publicado en *Diario Oficial*, de 25-5-1974, modificó las disposiciones sobre obligaciones de crédito y de dinero, derogando el art. 2199 del Código Civil, paradigma del nominalismo monetario y estableciendo el criterio de reajustabilidad.

<sup>60</sup> La ley 18.802, publicada en el *Diario Oficial*, de 9-6-1989, modificó las normas sobre la capacidad de la mujer casada contenidas en el Código Civil. En 1990, el Presidente del máximo tribunal, Luis Maldonado, señaló su desacuerdo con dicha modificación legal, por cuanto el marido continuaría siendo el administrador de la sociedad conyugal. Sobre la modificación legal, véase Fernando Rozas Vial, *Análisis de las reformas que introdujo la ley N° 18.802* (Ed. Jurídica, 1990).

<sup>61</sup> Discurso Inaugural de 1987, publicado en *Diario Oficial*, de 14-3-1987, p. 11.

para ponerlo al día con la actualidad de la vida de los negocios o asuntos sobre que legisla”.<sup>62</sup>

Por vía de ejemplo, expresa la conveniencia de modernizar y actualizar las reglas sobre documentos de crédito,<sup>63</sup> compraventa comercial, seguros, transporte<sup>64</sup> y quiebra.<sup>65</sup>

De igual modo, propone establecer normas claras sobre la regulación jurídica de la empresa, el estatuto del comerciante individual y colectivo, la propiedad industrial<sup>66</sup> y las sociedades anónimas.<sup>67</sup>

Por último, señala la necesidad de dictar normas acerca de la transferencia de tecnología, dándose así un paso importante para el fortalecimiento y protección de la economía y el comercio del país.<sup>68</sup>

### 1. 8. 5. Derecho Público

#### *Tribunal Constitucional:*

En 1969 el entonces Presidente de la Corte Suprema, Osvaldo Illanes, expresa la necesidad de crear, tal como en otros países, un Tribunal Constitucional destinado a conocer de las controversias entre los poderes colegisladores y del control constitucional a priori de las leyes, haciendo presente que en cuanto a su composición debería integrarse por mayoría de miembros de la Corte Suprema. De esta manera, el tribunal máximo manifestaba su acuerdo a un proyecto que proponía el Ejecutivo de la época.<sup>69</sup>

---

<sup>62</sup> Discurso Inaugural de 1976, en *Revista de Derecho, Jurisprudencia y C. Sociales*, N° 73 (1976), p. 21.

<sup>63</sup> Ley 18.092 sobre normas de letras de cambio y pagaré, publicada en el *Diario Oficial*, de 14-1-1982.

<sup>64</sup> Ley 18.680, publicada en el *Diario Oficial*, de 11-1-1988, modificó por completo el libro III del Código de Comercio relativo a la Navegación y al Comercio Marítimo.

<sup>65</sup> La Ley 18.175, publicada en el *Diario Oficial*, de 28-10-1982, fijó el nuevo texto de la ley de quiebra.

<sup>66</sup> La ley 19.039, publicada en el *Diario Oficial*, de 25-1-1991, estableció las normas aplicables a los privilegios industriales y a la protección de los derechos de propiedad industrial.

<sup>67</sup> La ley 18.046, publicada en el *Diario Oficial*, de 22-10-1981, estableció un nuevo estatuto sobre las sociedades anónimas.

<sup>68</sup> Sobre el tema, véase Gabriela Paiva Hanke, *Aspectos jurídicos y económicos de la transferencia de tecnología* (Ed. Jurídica, 1991).

<sup>69</sup> En virtud de la ley N° 17.284, publicada en el *Diario Oficial*, de 2-1-1970, se modificó la Carta de 1925, creándose el Tribunal Constitucional, integrado por cinco miembros; tres de ellos elegidos por el Presidente de la República, con acuerdo del Senado, y dos por la Corte Suprema, de entre sus miembros (art. 78 a) de la Constitución de 1925, modificada.

*Tribunales contencioso-administrativos:*

En innumerables oportunidades los diversos Presidentes del máximo tribunal han manifestado la necesidad de crear los tribunales contencioso-administrativos destinados a conocer de las controversias que se suscitaren entre la administración y los particulares, petición que tenía su antecedente en que si bien la Carta del 25 los había creado no es menos cierto que nunca se dictó la ley complementaria que regularía su establecimiento, causando una verdadera indefensión a los administrados. Especialmente analizaron el tema los Presidentes en 1968 y en 1970. De sus palabras, muy similares, se desprenden las bases para el establecimiento de los mismos:

- materia : deberían conocer de todo acto ilegal de la autoridad.
- tribunales : unipersonales en primera instancia y colegiados en segunda (una sala de la Corte de Apelaciones).
- procedimiento : breve y sumario.
- recursos : recurso de queja y casación ante la Corte Suprema.<sup>70</sup>

---

La Constitución de 1980 establece que el Tribunal Constitucional debe integrarse por siete miembros: tres ministros de la Corte Suprema, elegidos por ésta, un abogado designado por el Presidente de la República, dos abogados elegidos por el Consejo de Seguridad Nacional y un abogado elegido por el Senado, por mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio (art. 81 de la Constitución de 1980).

De esta manera, ninguna de las dos Cartas acogió la propuesta de que la mayoría de los miembros del mencionado tribunal sean designados por la Corte Suprema: en la Carta del 25 designaba a dos de cinco y en la actual carta fundamental a tres de un total de siete miembros. Sobre la materia, véanse Teodoro Ribera N., “El Tribunal Constitucional”, en *Revista Chilena de Derecho* II, Universidad Católica (1984), pp. 339-350; Luz Bulnes A., “La jurisprudencia del tribunal constitucional”, en *XVIII Jornadas Chilenas de Derecho Público* (Concepción, 1987), pp. 159-170; José L. Cea E., “Influencia del Tribunal Constitucional en el proceso de institucionalización pública”, en *Revista Chilena de Derecho*, Universidad Católica, 15, 1988, pp. 205-212.

<sup>70</sup> El art. 87 de la Constitución de 1925 señalaba: “habrá tribunales administrativos, formados por miembros permanentes, para resolver las reclamaciones que se interpongan contra los actos o disposiciones arbitrarias de las autoridades públicas o administrativas y cuyo conocimiento no esté entregado a los tribunales por la Constitución o las leyes. Su organización o atribuciones son materia de ley”. La mencionada ley no se dictó jamás. En 1976 con el establecimiento del recurso de protección, se les otorga a los particulares un mecanismo jurídico idóneo para atacar cualquier acto ilegal o arbitrario de la autoridad.

La Constitución de 1980 en su artículo 38 inciso 2°, modificado por la ley 18.825 de 17-8-1989, establece que: “cualquiera persona que sea lesionada en sus derechos por la administración del Estado, de sus organismos o de las municipalidades, podrá reclamar ante los tribunales que determine la ley, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiere afectar al funcionario que hubiere causado el daño”. Actualmente conocen de dichas materias los tribunales ordinarios, en tanto no exista un tribunal especial.

Sobre la materia, véanse Eduardo Soto K., “La competencia contencioso administrativa de los tribunales ordinarios de justicia”, en *Revista de Derecho, Jurisprudencia y C.*



*Recurso de inaplicabilidad:*

La Corte Suprema, a través de su máxima autoridad, ha señalado en más de una oportunidad la necesidad de otorgarle efecto general al recurso de inaplicabilidad, modificando la norma constitucional en virtud de la cual declarado un precepto legal inconstitucional sólo afecta a las partes interesadas y para el asunto controvertido.

En 1976, José M. Eyzaguirre expresa la conveniencia que “si la Corte Suprema, por tres sentencias consecutivas declara inconstitucional un precepto legal, esa declaración tenga efectos generales en el futuro, pues resulta absurdo y hace perder al tribunal y a los litigantes mucho tiempo, que, después de declarada, reiteradamente, la inconstitucionalidad, sea necesario recurrir de nuevo, una y otra vez, con el mismo objeto”.<sup>71</sup>

*Leyes sobre organización del Poder Judicial:*

En dos oportunidades los Presidentes del máximo tribunal han expresado su opinión sobre esta materia. En 1972, Ramiro Méndez señala que dichas leyes deberían ser redactadas con la participación de los tres poderes del Estado y Enrique Urrutia M. —por su parte— expresa en 1973, que

---

*Sociales*, N° 21-22 (1977), pp. 233-249; Rolando Pantoja, “La Justicia Administrativa en Chile”, en *Anuario de Derecho Administrativo* (1975), pp. 363-422; el mismo, “Los tribunales contenciosos administrativos en la Constitución de 1980”, en *Gaceta Jurídica*, 82 (1987), pp. 3-14; Pedro Pierry A., “Lo contencioso administrativo en la Constitución de 1980”, en *Revista de Derecho Público*, N° 29-30 (1981), Universidad de Chile, pp. 209-225; Hugo Caldera D., “Los tribunales ordinarios de justicia y el control de constitucionalidad del acto administrativo”, en *Revista de Derecho Público*, N° 39-40 (1986), Universidad de Chile, pp. 191-207; Lautaro Ríos A., “Los tribunales de lo contencioso administrativo y el artículo 38 de la nueva Constitución”, en *Revista de Derecho Público*, N° 29-30 (1981), Universidad de Chile, pp. 195-208; Hugo Caldera D., “Competencia de los tribunales ordinarios sobre los actos y omisiones de los órganos de la administración del Estado”, en *Gaceta Jurídica*, 52 (1984), pp. 16-26.

<sup>71</sup> Discurso Inaugural de 1976, en *Revista de Derecho, Jurisprudencia y C. Sociales*, N° 73 (1976); p. 16.

En el proyecto del Consejo de Estado se acogió dicha proposición, al señalarse en su art. 80 inciso 2° que “si la Corte Suprema declara inaplicable un mismo precepto legal en tres fallos uniformes y sucesivos, declarará al mismo tiempo la inconstitucionalidad de dicho precepto y ordenará de inmediato la publicación de este acuerdo en el *Diario Oficial*. A partir de la fecha de dicha publicación, el precepto inconstitucional dejará de producir efectos, lo que no empecerá a las sentencias ejecutorias con anterioridad”. El texto definitivo de la Constitución de 1980 suprimió dicho inciso.

Sobre la materia, véanse Luz Bulnes A., “El recurso de inaplicabilidad en la Constitución de 1980”, en *XIII Jornadas Chilenas de Derecho Público* (Concepción, 1982), pp. 13-27; Hugo Caldera D., “El recurso de inaplicabilidad”, *Gaceta Jurídica*, N° 37, 1983, pp. 12-17; Gustavo Fiamma O., “El recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad”, en *Gaceta Jurídica*, N° 94 (1988), pp. 3-14.

debería otorgársele iniciativa legal a la Corte Suprema en proyectos de ley relativos a la administración de justicia.<sup>72</sup>

*Superintendencia de la Corte Suprema sobre tribunales militares:*

En 1974, el entonces Presidente de la Corte Suprema, Enrique Urrutia M., manifiesta la necesidad de efectuar modificaciones legales y constitucionales tendientes a otorgarle al máximo tribunal la superintendencia sobre los tribunales militares en tiempo de guerra. Dichas modificaciones —según el Presidente— “no son de competencia del tribunal, el que debe atenerse a la ley vigente”.<sup>73</sup>

Por su parte, en 1981, Israel Bórquez se refiere a la norma constitucional establecida en la Carta de 1980 que excluye a los tribunales en tiempo de guerra de la superintendencia de la Corte Suprema, norma —en su opinión— “encaminada a sanear la posible inconstitucionalidad que habría afectado al art. 74 del Código de Justicia Militar, que entrega al General en Jefe del Ejército el ejercicio pleno de la jurisdicción militar, comprendida la jurisdicción disciplinaria, en presencia de lo que establecía el art. 36 de la Constitución de 1925 (...)”.<sup>74</sup>

*Decretos de insistencia:*

Durante el discurso inaugural de 1973, el Presidente Urrutia Manzano propone efectuar una modificación legal en el sentido de que si la Contraloría General de la República representa un decreto supremo y el Presidente de la República dicta un decreto de insistencia, la controversia suscitada fuera resuelta por un organismo ajeno, que podría ser el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema o la Corte de Apelaciones.<sup>75</sup>

---

<sup>72</sup> El art. 74 inciso 2° de la Constitución de 1980 establece que “La ley orgánica constitucional relativa a la organización y atribuciones de los tribunales sólo podrá ser modificada oyendo previamente a la Corte Suprema”.

<sup>73</sup> Discurso Inaugural de 1974, *Diario Oficial*, de 14-3-1974, p. 3.

<sup>74</sup> Discurso Inaugural de 1981, *Diario Oficial*, de 14-3-1981, p. 13.

El art. 79 inciso 1° de la Constitución de 1980 prescribe que “La Corte Suprema tiene la superintendencia directa, correccional y económica de todos los tribunales de la nación. Se exceptúan de esta norma el Tribunal Constitucional, el Tribunal Calificador de Elecciones, los tribunales electorales regionales y los tribunales militares de tiempo de guerra”.

<sup>75</sup> De acuerdo al art. 88 inciso 3° de la Constitución de 1980, “si la representación tuviere lugar con respecto a un decreto con fuerza de ley, y a un decreto promulgatorio de una ley o de una reforma constitucional por apartarse del texto aprobado, o a un decreto o resolución por ser contrario a la Constitución, el Presidente de la República no tendrá

*Justicia militar:*

En 1989, Luis Maldonado propone la dictación de una norma constitucional que impida la extensión de la jurisdicción castrense sobre civiles.

*Constitución Política de 1980:*

En dos oportunidades, los Presidentes del máximo tribunal manifestaron su opinión en torno a la Carta Fundamental de 1980.

En 1978, José María Eyzaguirre se refiere a la nueva institucionalidad que el país ha tomado y en particular a los estudios de una nueva carta fundamental la cual —en relación al Poder Judicial— debe reafirmar y hacer más efectiva su independencia. Debe señalarse, además, que propone la necesidad de plebiscitar la nueva Constitución, al expresar que “evidentemente creo que una nueva Constitución debe contar con la aceptación mayoritaria de aquellos a quienes va a regir”.<sup>76</sup>

Por su parte, en 1981, Israel Bórquez hace una referencia sintética del nuevo Estatuto Fundamental, en especial del capítulo VI que versa sobre el Poder Judicial. Según el mismo, la más importante innovación consiste en haber fortalecido la facultad de imperio de los tribunales.<sup>77</sup>

## 1. 8. 6. Otras modificaciones legales

- Establecer normas sobre terrorismo (1976 y 1984).<sup>78</sup>
- Refundir textos sobre entrada ilegal (1984).
- Modificar leyes relativas al ambiente (1987).

---

facultad de insistir, y en caso de no conformarse con la representación de la Contraloría deberá remitir los antecedentes al Tribunal Constitucional dentro del plazo de diez días, a fin de que éste resuelva la controversia”.

<sup>76</sup> Discurso Inaugural de 1978, *Diario Oficial*, de 14-3-1978, p. 7. La Constitución de 1980 fue aprobada por plebiscito efectuado el 11-9-1980.

<sup>77</sup> Discurso Inaugural de 1981, *Diario Oficial*, de 14-3-1981, p. 12. Sobre la Constitución de 1980 pueden consultarse las siguientes obras de carácter general: José L. Cea, *Tratados de la Constitución de 1980* (Santiago de Chile: Ed. Jurídica, 1988); Emilio Pfeffer, *Manual de Derecho Constitucional* (Santiago de Chile: Ed. Ediar-Conosur, 1987-1990); Luz Bulnes A., *Constitución Política de la República de Chile. Concordancias, anotaciones y fuentes* (Santiago de Chile: Ed. Jurídica, 1981); Carlos Andrade, *Génesis de las Constituciones de 1925 y 1980* (Santiago de Chile: Ed. Ediar-Conosur, 1988); Neville Blanc y otros, *La Constitución Chilena*, 2 vol. (Valparaíso: 1990).

<sup>78</sup> Véase ley 18.314 que establece conductas terroristas, publicada en *Diario Oficial*, de 17-5-1984.

- Modificar leyes que impiden trabajar al que ha cumplido condena (1987).
- Modificar ley sobre IVA a libros y revistas (1987).
- Restituir al Colegio de Abogados el control de la ética profesional 1988 y 1990.
- Reforma a la carrera de Derecho (1976 y 1977).
- Estudiar sistema de readaptación y reeducación de menores (1969).
- Establecer un mecanismo de uniformidad jurisprudencial (1960 y 1978).
- Por último, debe señalarse que en 1992 por primera vez se critica una eventual modificación legal y relativa al Consejo Nacional de la Magistratura.

## II. MATERIAS DE INTERÉS RELATIVAS AL PODER JUDICIAL

### 2. 1. Independencia del Poder Judicial

El tema de la independencia de la judicatura ha sido especialmente abordado por el máximo tribunal y defendido como uno de los pilares básicos del Estado de Derecho.

En 1971, Ramiro Méndez señala que la independencia puede ser analizada tanto desde la perspectiva de la gestación de los magistrados, como desde de las decisiones judiciales. En cuanto al primer punto observa que el sistema mixto de nombramiento —con la participación conjunta de la judicatura y del Presidente— ha producido resultados bastantes satisfactorios; y en cuanto al segundo, consigna que los jueces tienen entereza y no se doblegan ante los influjos. Por eso —sentencia— “la independencia de nuestra justicia es paradigma para América y conocida en otros continentes, sólo unos cuantos chilenos se empeñan en ignorarlas”.<sup>79</sup> Como ejemplo de lo anterior, señala los juicios sobre desafuero de parlamentarios y los juicios sobre impuestos, en todos los cuales la judicatura ha actuado con absoluta imparcialidad.

Con posterioridad, Enrique Urrutia M., en 1975, frente a algunas críticas de supuesta imparcialidad de los tribunales, expresa: “Los tribunales han continuado actuando con la independencia que les confiere la ley, según su real saber y entender, ajenos a toda intromisión del gobierno que ahora rige el país; pudiendo agregar que, con posterioridad a los hechos

<sup>79</sup> Discurso Inaugural de 1971, *Diario Oficial*, de 13-3-1971, p. 13.

ocurridos en septiembre de 1973, las resoluciones de los tribunales han sido cumplidas, sin excepción alguna, cuidando el Poder Ejecutivo de no menoscabar, ni en lo más mínimo, la autonomía, derechos y prerrogativas de los funcionarios judiciales”.<sup>80</sup>

Desarrollando esta idea, Rafael Retamal, en 1986, consigna que “en lo externo, pues, la independencia del Poder Judicial está asegurada por la Constitución y la ley (art. 73 de la Constitución y art. 12 del Código Orgánico de Tribunales). Ninguna otra autoridad puede cercenar las facultades de dicho Poder, de fallar las causas y de hacer ejecutar lo juzgado. Lo que establecen los preceptos citados ha sido práctica constante del poder político; nunca ha pretendido ejercer funciones judiciales. Si hay motivos psicológicos para que algún funcionario judicial se sienta inhibido en su libertad e independencia funcionaria, el asunto es de su exclusiva incumbencia”.<sup>81</sup>

Luis Maldonado, en 1990, aborda con detención el tema de la independencia del Poder Judicial; la cual debe manifestarse, en su ser, no dependiendo de otro poder, y, en su obrar, actuando imparcialmente. A objeto de hacer aún más palmario lo anterior, propone la necesidad de establecer una autonomía política —lo que se logra mediante la inamovilidad de los magistrados y mediante un sistema de nombramiento idóneo—, económica —según ya se ha analizado— y funcional —destacando la necesidad de crear una Policía Judicial—. Al año siguiente, protesta por las críticas que se le formularon a la judicatura por su supuesta falta de independencia, rechazándolas de plano, consignando que hasta 1990 el Poder Judicial estaba supeditado en sus investigaciones a otro Poder del Estado.

Por último, en 1992, Enrique Correa señala que los tribunales son independientes y siempre lo han sido y que en sus actuaciones jamás ha intervenido el Poder Político.

De esta manera puede concluirse que la judicatura ha actuado con absoluta independencia, según el decir de sus máximos representantes, sin que ningún otro Poder haya pretendido ejercer influencia alguna y, además, en su obrar, los magistrados también han tenido imparcialidad.

El Poder Judicial en nuestro ordenamiento jurídico se encuentra atado a la ley, de manera tal que su actuación depende del marco que le haya dado el legislador, sin perjuicio que le corresponde su interpretación. En cuanto a la influencia del Poder Ejecutivo, la gran cantidad de fallos adversos a la administración, en materia contencioso-administrativa y vía recursos de protección, es una muestra cabal de la independencia de la

---

<sup>80</sup> Discurso Inaugural de 1975, *Diario Oficial*, de 14-3-1975, p. 5.

<sup>81</sup> Discurso Inaugural de 1986, *Diario Oficial*, de 14-3-1986, p. 11.

judicatura. En materia jurídico-política su esfera se ha visto limitada en parte por las restricciones impuestas por el constituyente y el legislador, particularmente en los estados de excepción constitucional, lo que no ha impedido que los jueces aun en dichas situaciones excepcionales, mediante la correcta interpretación del texto constitucional, velen por una prudente y juiciosa aplicación de la ley.<sup>82</sup>

## 2. 2. La judicatura y la modernidad

### 2. 2. 1. Modernización del derecho

En 1971, Ramiro Méndez —frente a los aires de modernidad de la época— señala que los jueces no se resisten al avance del Derecho, muy por el contrario, asimilan los nuevos principios y los aplican con plena conciencia; “pero sin caer en el espejismo, y olvidar que el transcurso del tiempo convierte lo revolucionario de un día en tradición al siguiente”. Es por eso —concluye el alto magistrado— que “no aceptamos el arrasamiento de todos los principios vigentes, como algunos lo pretenden”.<sup>83</sup>

Completando lo anterior, Enrique Urrutia M., dos años después, consigna la necesidad de ponderar debidamente la conveniencia de las reformas que se pretenden llevar adelante, teniendo en consideración que aquellas siempre deben de tener como objeto primordial “el respeto a la dignidad humana y la eliminación de la pobreza, sin hacer nuevos pobres, sino, por el contrario, conseguir que todos puedan vivir mejor”.<sup>84</sup>

Por último, en 1977, José M. Eyzaguirre formula votos para el buen éxito de la labor de modernización y adecuación de la legislación orgánica, procesal y sustantiva a las nuevas realidades, señalando que es una reforma muy necesaria.

### 2. 2. 2. Modernización del Poder Judicial

Sin duda que Rafael Retamal sintetiza, con elocuencia, en 1984, la postura del máximo tribunal sobre esta materia —tantas veces aludida a la judicatura, en cuanto a una supuesta reticencia de aquella a “modernizarse”—. Afirma:

---

<sup>82</sup> Sobre interpretación constitucional, véase Enrique Navarro Beltrán, “Mecanismos de interpretación establecidos en la Constitución de 1980”, en *Interpretación, integración y razonamiento jurídicos* (Santiago de Chile: Edit. Jurídica, 1992), pp. 305-326.

<sup>83</sup> Discurso Inaugural de 1971, *Diario Oficial*, de 13-3-1971, p. 12.

<sup>84</sup> Discurso Inaugural de 1973, *Revista de Derecho, Jurisprudencia y C. Sociales*, N° 70 (1973), p. XXIII.

No sé realmente si la modernización consiste en la rapidez. Si es así resulta plenamente aceptable en ciertas cuestiones. Por ejemplo, si se comete un delito en una región montañosa alejada del centro poblado donde funciona el tribunal, sería muy moderno que el juez se trasladara en helicóptero o en un veloz automóvil al lugar del suceso para cumplir su deber indagatorio, descubriendo huellas, interrogando testigos o inculpados, etc. Sería también muy moderno que a las pruebas actuales se agregaran otras obtenidas mediante la tecnología; y en cuanto a la captación de hechos procesales es indudable la importancia de la computación. Pero pare Ud. de contar, porque las sentencias no se piensan en minutos, ni la piensa la computadora, por muy buena que sea la alimentación que reciba.<sup>85</sup>

En 1988, reitera su postura en cuanto a que es bueno, en ciertos aspectos, el empleo de maquinarias modernas “pero hay una actividad —señala— en que la computación no cuenta y es la meditación del fallo o de otras decisiones. Mientras no exista una computadora que piense por el hombre, esa principalísima actividad de la judicatura no podrá ser objeto de métodos para agilizarla. Pensar con rapidez es peligroso porque equivale a no pensar.”<sup>86</sup>

Por último, en 1990, Luis Maldonado vuelve a consignar la importancia de la tecnología como herramienta de utilidad para la judicatura.

En suma, la postura de la Corte Suprema en relación a la “modernización” es muy clara: se puede mejorar toda la implementación técnica con que cuenta el juez y los organismos asesores, pero la labor fundamental del juez, como es la de dictar sentencia, no puede estar sujeta a un plazo perentorio y en ella la tecnología no cuenta. Los jueces no rechazan el modernismo tecnológico, por el contrario lo aceptan, pero limitado a una labor meramente coadyuvante a la principal del juez, esto es, valerse de la tecnología como un medio no como un fin en sí mismo.

### 2. 3. Defensa de los derechos humanos

El tema de los “derechos humanos”<sup>87</sup> también fue tratado, de manera directa e indirecta, por el máximo tribunal, enfocándolo desde diversas

<sup>85</sup> Discurso Inaugural de 1984, *Diario Oficial*, de 14-3-1984, p. 8.

<sup>86</sup> Discurso Inaugural de 1988, *Diario Oficial*, de 14-3-1988, p. 15.

<sup>87</sup> Sobre el tema de los derechos humanos, véanse Juan C. Ossandón, “El fundamento de los derechos humanos”, *Revista de Derecho, Jurisprudencia y C. Sociales*, N° 41-42 (1987), pp. 31-48; Eduardo Soto Kloss, “La dignidad de la persona, fundamento de los derechos humanos: Antecedentes veterestamentarios”, *Revista de Derecho Público*, N° 41-42 (1987), Universidad de Chile, pp. 49-75; Alejandro Guzmán B., “Sobre la naturaleza de la teoría de los derechos del hombre”, *Revista de Derecho Público*, N° 41-42 (1987), Universidad de Chile, pp. 77-93; Beltrán Villegas, “Una dignidad vulnerable: La dignidad humana según la Biblia”, *Estudios Públicos*, 44 (1991), pp. 5-16.

perspectivas, abarcando el tema en un sentido general, como en una perspectiva particular, relativa a la materia de los denominados detenidos desaparecidos como a la del exilio.

En 1974, Enrique Urrutia M. expresa su opinión sobre la materia señalando que los derechos humanos son universales y deben ser siempre respetados: “los derechos humanos —señala— no son ocasionales ni reconocidos para ser cumplidos sólo en ciertos países; son derechos aceptados universalmente, respetados en nuestra patria, siendo de advertir que les resta autoridad moral para constituirse en defensores de dichos derechos a aquellos que no han actuado, o no han sabido actuar, de la misma manera que lo han hecho con esta nación, en países que, con sus excesos, han asombrado al mundo civilizado”.<sup>88</sup> Por otra parte, manifiesta su interés en cuanto a regular la situación jurídica de los detenidos.

Un año después, el mismo Presidente, expresa su malestar por la circunstancia de que las comisiones extranjeras que han venido al país ignoraron por completo la opinión dada por el máximo tribunal en relación al tema de los derechos humanos en Chile; agregando que todos los órganos del Estado, salvo el Congreso Nacional, funcionan normalmente y que los tribunales han actuado con absoluta independencia y la autoridad ha adoptado medidas excepcionales vigentes desde 1810. Por último, en relación a la práctica de torturas o atrocidades de igual naturaleza, consigna: “puedo afirmar que aquí no existen paredones ni cortinas de hierro y cualquier afirmación en contrario se debe a una prensa proselitista de ideas que no pudieron ni podrán prosperar en nuestra patria”;<sup>89</sup> concluyendo que se ha producido un abuso en la interposición de recursos de amparo sin que se den los presupuestos básicos de hecho pertinentes.

En 1976, José María Eyzaguirre expresa la importancia de la dictación del DS 187 de 30-1-1976, que establece normas que garantizan de los detenidos en virtud de los estados de sitio, continuando disposiciones tendientes a evitar la aplicación de apremios indebidos. Por su parte, se refiere en la misma oportunidad a las presentaciones efectuadas por el Comité Pro Paz en el sentido de solicitar a la Corte Suprema la designación de un Ministro en Visita para investigar el supuesto desaparecimiento de 163 personas. A tal petición, la mayoría de los Ministros estuvo por denegar la solicitud, ordenando a los Ministros Visitadores de cada uno de los juzgados el vigilar la adecuada tramitación de los procesos pertinentes. El voto de minoría —entre los cuales se encontraba el del señor Presidente del

---

<sup>88</sup> Discurso Inaugural de 1974, *Diario Oficial*, de 14-3-1974, p. 8.

<sup>89</sup> Discurso Inaugural de 1975, *Diario Oficial*, de 14-3-1975, p. 8.



máximo tribunal— estuvo por aceptar la solicitud. En todo caso, señala, que la unanimidad del tribunal estuvo por investigar los hechos y que de los informes de los Ministros encargados de las visitas a los juzgados se concluye que en numerosos casos las personas cuyo desaparecimiento se investiga, se encontraban en libertad, otras en el extranjero, otras detenidas en virtud del estado de sitio o procesadas en tribunales militares y finalmente algunas personas eran delincuentes de derecho común. En 1977, el Ministro consigna que se han realizado visitas a los campamentos de detenidos.

El Presidente Rafael Retamal aborda el tema desde una perspectiva diversa. En 1984, señala como mecanismo tendiente a obtener el mejoramiento de la administración de justicia el adoptar las medidas necesarias a objeto de hacer inverosímil las denuncias sobre desaparecidos y torturas y, en segundo lugar, reestudiar la situación de los exiliados, a objeto de disminuir el exceso de recursos de amparo que han obstaculizado el que los tribunales se dediquen a asuntos ordinarios. En 1987 reitera la necesidad de abandonar la disposición legal que permitió la aplicación del exilio.

Por último, en 1989, Luis Maldonado manifiesta su complacencia con la medida gubernamental de poner fin a los estados de excepción y propone la dictación de indultos presidenciales para las personas que hubieren ingresado ilegalmente a la Patria y que de acuerdo a las disposiciones legales vigentes a la época podrían ser objeto de penas considerablemente altas y gravosas.<sup>90</sup> Por último, en 1991, señala que el Poder Judicial, a la fecha, se encontraba solo en la defensa de los derechos humanos y supeditado en sus investigaciones a otro Poder del Estado.

## **2. 4. La judicatura y sus relaciones con otras instituciones**

### **2. 4. 1. Relación con otros poderes**

En general, salvo en el período de 1970-1971, en el que la autoridad jurídica discutió su participación en la ejecución de las resoluciones judiciales, las relaciones de la judicatura con los demás poderes del Estado han sido absolutamente normales e incluso en el propio año 1973 el Presidente del máximo tribunal, Enrique Urrutia M., calificó de “normales” las relaciones con la autoridad ejecutiva, como a su vez de “cordiales” con la legislativa.

---

<sup>90</sup> Véase DL N° 81 de 6-11-1973.

## 2. 4. 2. Cumplimiento de resoluciones (Accionar de la Autoridad Ejecutiva)

Tal como ya se ha dicho, salvo en el período 1970-1973, la autoridad ejecutiva ha cumplido a cabalidad su rol en materia de ejecución de resoluciones judiciales, así —por lo demás— lo reconoce expresamente Enrique Urrutia M. en 1974 y 1975.

En 1976, José María Eyzaguirre considera conveniente constitucionalizar los art. 10 y 11 del Código Orgánico de tribunales, relativos a esta materia<sup>91</sup> y en especial a la facultad de imperio, cosa que ocurre con la dictación de la Carta Fundamental de 1980, situación que destaca especialmente Israel Bórquez en 1981.

Por último, Luis Maldonado, en 1991, señala que el Poder Judicial se encontraba supeditado en sus investigaciones a otro Poder del Estado.

## 2. 4. 3. El juez y su relación con el legislador

Tal como lo señala, en 1968, Osvaldo Illanes, la labor fundamental de la judicatura del Estado constitucional moderno es “interpretar y aplicar la ley con independencia y según su leal saber y entender”.<sup>92</sup> Lo mismo reitera, en 1970, Ramiro Méndez al consignar que la justicia es “simplemente aplicadora de las leyes que rigen en la República”<sup>93</sup> y, en 1992, Enrique Correa al expresar que los jueces “somos aplicados de la ley, no como meros lectores de ellas, sino como juiciosos y estudiosos intérpretes de su aplicación al caso juzgado”.<sup>94</sup> El anterior raciocinio se remonta en Chile a fines del siglo pasado cuando un autor civilista expresaba en una obra de derecho civil que la judicatura “ha sido creada para aplicarla —la ley— sea buena o mala”<sup>95</sup> y recogido por nuestra propia Corte Suprema, quien ha afirmado que la judicatura “no tiene intervención alguna en la confección de la ley y ha sido creada para aplicarla sea buena o mala”.<sup>96</sup>

<sup>91</sup> Véase art. 73 de la Constitución de 1980. Sobre la materia, véanse Alejandro Silva B., “Cambios en cuanto al Poder Judicial en la Constitución de 1980”, *XIII Jornadas Chilenas de Derecho Público* (Concepción, 1982), pp. 161-173; Jaime del Valle, “El fortalecimiento del Poder Judicial chileno”, *Revista Chilena de Derecho*, N°15 (1980), Universidad Católica, pp. 37-46.

<sup>92</sup> Discurso Inaugural de 1968, *Diario Oficial*, de 14-3-1968, p. 11.

<sup>93</sup> Discurso Inaugural de 1970, *Diario Oficial*, de 14-3-1970, p. 8.

<sup>94</sup> Discurso Inaugural de 1992, *Diario Oficial*, de 17-3-1992, p. 10.

<sup>95</sup> Luis Claro Solar, *Explicaciones de derecho civil chileno y comparado*, 17 vol. (Santiago de Chile: 1898), pp. 1 y ss.

<sup>96</sup> C. Suprema, sentencia de 25-5-1962, considerando 17°, *Revista de Derecho, Jurisprudencia y C. Sociales*, N° 59 (1962); sobre la materia, véanse Bernardino Bravo Lira, “Arbitrio judicial y legalismo”, en *Interpretación, integración y razonamiento jurídicos*, op. cit., pp. 243-256.

Más gráfico aún, el entonces Presidente de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carlos Cerda Medina, declaraba en julio de 1981: “Si la ley es injusta — ¡qué demonios! — tenemos que aplicarla porque está vigente”.<sup>97</sup> El anterior criterio corresponde exactamente a lo planteado a fines del siglo XVIII por Montesquieu, para quien “los jueces de la nación no son ni más ni menos que la boca que pronuncia las palabras de la ley, seres inanimados que no pueden mitigar la fuerza y el rigor de la ley misma”.<sup>98</sup>

#### 2. 4. 4. La judicatura y la prensa

En 1982, Israel Bórquez señala su preocupación por el abuso que cometen los medios de comunicación al destacar excesivamente la importancia de los delitos, con lo cual —afirma— “pareciera que hacen la apolo-gía del delito. Mas no cabe duda que sin quererlo dictan cátedra a los noveles delincuentes. Ese es el daño que la crónica roja así ejercida causa a la comunidad”.<sup>99</sup> De esta manera, expresa, que si se desea la eficiencia en la administración de justicia es necesario que “moderen la publicidad de los hechos delictuosos, limitándola en lo posible a una objetiva información. Cuando ésta rompe el secreto de las diligencias investigatorias de un sumario —como muchas veces ha ocurrido— precave a los delincuentes comprometidos y les facilita la búsqueda de coartadas y artificios para eludir la acción de la justicia”.<sup>100</sup>

En 1985, Rafael Retamal también aborda el tema señalando que la prensa se ha transformado en un Cuarto Poder del Estado. Considera el Ministro que “del poder de la prensa la tarea judicial no puede buscar la exhibición publicitaria como norma aunque tampoco ocultarse como medrosa de la crítica. Debe, pues, la justicia entregar a la prensa con fines educativos las decisiones que tengan sentido social y humano, que las hay en apreciable número, y así verá aumentado su prestigio en la ciudad o ciudades, es decir, progresará y será mejor porque hará realidad una labor magisterial”.<sup>101</sup>

#### 2. 4. 5. La judicatura y los abogados

Es el propio Rafael Retamal quien aborda el tema para señalar las reglas que deben gobernar dicha relación. Señala que ésta debe basarse en

<sup>97</sup> Citado por Gonzalo Rojas, en “Notas sobre el positivismo legal en Chile en el siglo XX”, en *Revista Finis Terrae*, N° 1 (1993), p. 41.

<sup>98</sup> Montesquieu, *El espíritu de las leyes* (Santiago de Chile: 1988), p. 54.

<sup>99</sup> Discurso Inaugural de 1982, *Diario Oficial*, de 15-3-1982, p. 20.

<sup>100</sup> *Ibidem*.

<sup>101</sup> Discurso Inaugural de 1985, *Diario Oficial*, de 14-3-1985, p. 16.

la recíproca consideración y respeto, y agrega que los asesores letrados deben ser acreedores de un tratamiento justo y afable.

#### 2. 4. 6. La judicatura y la comunidad

En 1976, José María Eyzaguirre aboga por mejorar la atención al público, en especial en los juzgados del crimen.

Por su parte, Rafael Retamal, en 1985, señala que el trato con el mundo, es decir con el público, es causa de progreso o mejoramiento para la justicia. “Oír al hombre común —expresa— es aprender cosas que están en sus costumbres, en sus decires, en sus reacciones espontáneas, es enriquecer al juez su humanidad. Y esto es mejorar”.<sup>102</sup> Al año siguiente reitera esta misma idea al resaltar la importancia de la opinión profana a objeto de conocer el resultado social de los fallos judiciales.<sup>103</sup>

### 2. 5. Justicia laboral

El máximo tribunal ha afirmado en reiteradas oportunidades la importancia de la justicia laboral y la circunstancia de que ésta en el hecho se administra rectamente.

Ramiro Méndez señala, en 1971, que la justicia chilena no favorece a ninguna clase social en particular y que frente a las críticas de la época en el sentido que los patrones eran beneficiados con aquella, afirma categóricamente que la mayoría de los fallos, vía recurso de queja, favorecen a los trabajadores. A su vez, propone que el legislador estudie un estatuto único para todos los trabajadores<sup>104</sup> y además solicita que se precise el concepto de trabajador de exclusiva confianza del empleador.

Años después, en 1974, Enrique Urrutia M. expresa que la justicia laboral debe estar entregada al conocimiento exclusivo de los tribunales ordinarios del trabajo.<sup>105</sup>

<sup>102</sup> *Ibíd*em p. 17.

<sup>103</sup> Sobre el tema, véase Davor Hrasic Y., “Poder Judicial y opinión pública”, *El Mercurio*, 8-4-1991, p A2; y también en “El razonamiento judicial y la opinión pública”, en *Interpretación, integración y razonamiento jurídicos, op. cit.*, pp. 493-499. El autor plantea el tema a raíz de ciertas opiniones expresadas en una entrevista por Enrique Correa, quien afirma textualmente: “No me interesa la opinión pública”, *El Mercurio*, 18-5-1991; y en otra entrevista expresa “la trascendencia que pueda tener un hecho en el acaecer del mundo exterior es algo que no nos empeece”, *El Mercurio*, 24-3-1991.

<sup>104</sup> El DL 2200 de 1978 estableció un estatuto único para todos los trabajadores, suprimiendo la distinción entre obreros y empleados.

<sup>105</sup> El DL 3648 de 1981 suprimió la jurisdicción especial en materia laboral entregándola a los tribunales ordinarios. El Código del Trabajo de 1987 creó 13 juzgados especiales del trabajo, restableciendo la jurisdicción laboral.

Por su parte, Israel Bórquez, en 1982, critica lo aseverado por algunos en el sentido de que en Chile la justicia laboral habría desaparecido, apartando un conjunto de estadísticas que demostrarían fehacientemente lo contrario.

Por último, Rafael Retamal, en 1987, aborda el tema de la importancia de que se hayan restablecido los tribunales especiales laborales, “la existencia de estos tribunales —señala— es indispensable para mantener la paz entre empleadores y trabajadores, razón fundamental de su creación”.<sup>106</sup>

## 2. 6. Aplicación del art. 5 del Código Civil

El artículo 102 del Código Orgánico de Tribunales en su número 4 señala que el Presidente de la Corte Suprema en su discurso inaugural anual debe dar cuenta “de las dudas y dificultades que hayan ocurrido a la Corte Suprema y a las Cortes de Apelaciones en la inteligencia y aplicación de las leyes y de los vacíos que se noten en ellas y de que se haya dado cuenta al Presidente de la República en cumplimiento del artículo 5° del Código Civil”.

Por su parte, el art. 5° del Código Civil prescribe que “la Corte Suprema de Justicia y las Cortes de Alzada, en el mes de marzo de cada año, darán cuenta al Presidente de la República de las dudas y dificultades que hayan ocurrido en la inteligencia y aplicación de las leyes y los vacíos que noten en ellas”.

Ya en 1970, Ramiro Méndez señala que no se han presentado dichas dudas ni dificultades y que la experiencia se ha encargado de demostrar que dicha disposición legal ha perdido su razón de ser. Lo mismo reitera tres años después Enrique Urrutia M., proponiendo un año después, como un medio de superar la renuencia de los tribunales al cumplimiento de dicha obligación, que la Corte Suprema tome nota expresa de un libro especial de las dudas que se presenten para comunicarlas en su oportunidad a la Presidencia de la Suprema, dando así cumplimiento a lo dispuesto en el art. 102 N° 4 del Código Orgánico de Tribunales.

Sin embargo, en la práctica no se ha dado cumplimiento a dicho trámite, puesto que las Cortes de Apelaciones no han presentado en general cuestionamientos en dicho sentido.

Por otra parte, la propia Corte Suprema tampoco, salvo contadas excepciones, vía los propios discursos inaugurales, ha hecho uso de dicha

---

<sup>106</sup> Discurso Inaugural de 1987, *Diario Oficial*, de 14-3-1987, p. 10.

disposición, con lo cual ésta ha ido cayendo en desuso, lo que no debe ser mirado con buenos ojos, puesto que si se utilizara correctamente dicha vía podría mejorarse sustantivamente la técnica legislativa. En el hecho, en las propias decisiones contenidas en las sentencias y a veces, en la diversidad de las mismas, sólo puede desprenderse indirectamente que una determinada disposición presenta dificultades en su recta inteligencia, lo cual afecta seriamente la certeza jurídica y la uniformidad de la jurisprudencia.<sup>107</sup>

## 2. 7. Otros temas de carácter general

Existe un sinnúmero de otros temas, de la más variada índole abordados por los Presidentes de la Corte Suprema. Destacaremos los más relevantes.

### 2. 7. 1. Estado de Derecho:

En 1969, Osvaldo Illanes configura al Estado de Derecho como base de la paz y cuyas características fundamentales son la existencia de tres poderes independientes, que cumplan sus funciones propias (Legislativo: dictar leyes claras y concisas; Ejecutivo: cumplir las resoluciones, y Judicial: interpretar y aplicar la ley); el respeto a los valores fundamentales de la libertad, igualdad, solidaridad y justicia, como, a su vez, el respeto a los derechos humanos.

Por su parte, en 1972, Ramiro Méndez señala que el Poder Judicial debe ser el baluarte del Estado de Derecho.

Por último, un año después, Enrique Urrutia M. enumera como elementos fundamentales del mismo el respeto a la ley y a la Constitución, el respeto de las garantías fundamentales, la sanción o nulidad de los abusos y el cumplimiento de las decisiones judiciales.<sup>108</sup>

---

<sup>107</sup> Un autor nacional ve en la disposición contenida en el artículo 5° del Código Civil un resabio del referimiento al legislador; véase Alejandro Guzmán B., “Historia del referimiento al legislador II: El Derecho Nacional chileno”, *Revista de estudios histórico-jurídicos*, N° 7 (1982), Universidad Católica de Valparaíso, pp. 107 y ss.

<sup>108</sup> Los art. 6 y 7 de la actual Constitución consagran los principios básicos del Estado de Derecho. Sobre la materia, véanse Lautaro Ríos A., “El Estado de Derecho”, *Revista de Derecho*, N° 6 (1982), Universidad Católica de Valparaíso, pp. 73-86; Eduardo Soto Kloss, “Estado de Derecho y procedimiento administrativo”, *Revista de Derecho Público*, N° 28 (1980), Universidad de Chile, pp. 101-123; Mario Verdugo M., “Notas para la conceptualización del Estado de Derecho y determinación de sus principales características”, *Temas de Derecho*, 1 N° 1 (1986), Universidad Gabriela Mistral, pp. 18-20; Bernardino Bravo Lira, “Raíz y razón del Estado de Derecho en Chile”. *Revista de Derecho Público*, N° 47-48 (1990), Universidad de Chile, pp. 27-63.

### 2. 7. 2. Infracciones del tránsito:

Ya en 1967 la Corte Suprema manifiesta su preocupación por el incremento de los accidentes del tránsito con trágicas consecuencias. Propone aumentar las sanciones y las multas e igualmente exigir de los transeúntes un debido cumplimiento de dichas normas. Igual idea reitera en 1971 Ramiro Méndez.

En 1973, Enrique Urrutia M. reitera su preocupación por el tema. “El hombre en el automóvil —afirma— pareciera que se transforma y adopta, generalmente, una actitud agresiva y competitiva que le hace olvidar la prudencia, y que muchas veces se exterioriza en insultos, ademanes soeces y hasta agresiones físicas, que permiten concluir que en la carretera se acaban los derechos del hombre e impera la caverna”.<sup>109</sup> Solicita una actitud decidida de la autoridad para solucionar el problema. Con posterioridad, José María Eyzaguirre manifiesta en 1976 que resulta alarmante el recrudecimiento de los accidentes del tránsito. Como remedios de solución propone una mayor rigurosidad en el otorgamiento de libertades bajo fianza, suspender rigurosamente las licencias, aumentar las indemnizaciones por el daño moral y fiscalizar adecuadamente los exámenes de alcoholemia.

### 2. 7. 3. Otros:

Entre los temas más variados tratados pueden mencionarse el aumento de la delincuencia juvenil (1967); la importancia del bien jurídico del honor y la necesidad de protegerlo debidamente (1967 y 1971);<sup>110</sup> inconveniencia de la abolición de la pena de muerte para delincuentes de alta peligrosidad (1968)<sup>111</sup> y hacer más rigurosa la legislación en materia de delitos de incendio —1969—. A su vez, en 1986, se resalta la importancia de la garantía del derecho a la defensa jurídica, que se ha implementado a través de las Corporaciones de Asistencia Judicial y de la Vicaría de la Solidaridad.<sup>112</sup>

<sup>109</sup> Discurso Inaugural de 1973, *Revista de Derecho*, N° 70 (1973), p. XXI.

<sup>110</sup> El art. 19 N° 4 de la Constitución consagra “el respeto y protección a la vida privada y pública y a la honra de la persona y de su familia”. Vinculado a ello el art. 41 de la Constitución consagra el delito de injuria. Sobre el tema, véase Carlos Kunsemüller L., “Protección legal a la esfera de intimidad o derecho a la privacidad”, *Temas de Derecho*, 4 N° 2 (1989), Universidad Gabriela Mistral, pp. 7-16.

<sup>111</sup> De acuerdo al art. 19 N° 1 inciso 3 de la Constitución, “la pena de muerte podrá establecerse por delito contemplado en ley aprobada con quórum calificado”. Sobre el tema, véase Jaime Naquira, “Consideraciones sobre la pena de muerte”, *Revista Chilena de Derecho*, N° 9 (1982), Universidad Católica, pp. 541-547.

<sup>112</sup> Sobre defensa jurídica, véanse José L. Cea E., “La igual protección de los derechos”, *Revista de Derecho*, vol. 9 N° 3, 1982, Universidad Católica, pp. 521-540; Héctor Oberg Yáñez, “La ayuda legal y la igualdad ante la ley”, *XIII Jornadas Chilenas de Derecho Público* (Concepción, 1982), pp. 107-110.

### III. TEMAS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL

#### 3. 1. Feriado judicial

La Corte Suprema en reiteradas oportunidades ha propugnado por el restablecimiento del feriado judicial a 45 días, tal como hace algunas décadas, extendiéndolo desde el 15 de enero al 1° de marzo de cada año y suprimiéndose de esta forma la actual norma que los restringe sólo al mes de febrero.<sup>113</sup>

Ya en 1968, Osvaldo Illanes señala que la reducción del feriado al solo mes de febrero no ha producido ningún resultado positivo y que el aumentarlo a 45 días no importaría ningún menoscabo, puesto que en la Corte de Apelaciones de Santiago seguirían funcionando dos salas de turno y a los tribunales del crimen no les afecta el feriado.

En 1970, Ramiro Méndez reitera dicha petición, afirmando que la reducción del feriado no ha producido ventaja alguna y agregando que hay funcionarios de más de 40 años de servicios que merecerían un descanso más prolongado. Por último, expresa que dicha medida la desean también la mayor parte de los abogados, como también los deudores y demandados, por lo demás siempre existiría la posibilidad de solicitar la habilitación de feriado.

Por último, Enrique Urrutia M. vuelve sobre este tópico en 1975 al manifestar que debe darse a los jueces un descanso conveniente y que cualquier obrero o empleado con varios años de servicio goza de vacaciones superiores a la de aquéllos.<sup>114</sup>

#### 3. 2. Jornada laboral de los jueces

Conocida es la crítica que se ha formulado a la judicatura por su reducida jornada de trabajo, que en el hecho se extiende por sólo medio día.<sup>115</sup>

---

<sup>113</sup> Art. 113, inciso 1° del Código Orgánico de Tribunales, extiende las vacaciones desde el 1° de febrero hasta el primer día hábil del mes de marzo.

<sup>114</sup> De acuerdo al art. 98 del estatuto administrativo (Ley 18.874, publicado en el *Diario Oficial*, de 23-9-1989), las vacaciones anuales de los funcionarios públicos se extenderán por 15 días hábiles (para los funcionarios con menos de 15 años de servicio), 20 días hábiles (para los funcionarios con 15 o más años de servicio y menos de 20) y 25 días hábiles (para los funcionarios con 20 o más años de servicio). Para estos efectos no se considerarán como días hábiles los sábados y se computarán los años trabajados como dependiente, en cualquier calidad jurídica, sea en el sector público o privado.

<sup>115</sup> El art. 97 N° 4 del Código Orgánico de Tribunales señala que es facultad exclusiva de la Corte Suprema “determinar la forma de funcionamiento de los Servicios Judiciales fijando los días y horas de trabajar en atención a las necesidades del servicio”.



La Corte Suprema también ha elevado su voz en relación a este tema y ha señalado los fundamentos de la misma.

En 1975, Enrique Urrutia M. afirma que “esta media jornada es muy justificable para los que propiamente administran la justicia, como los Ministros y jueces, pues deben dedicar no pocas horas fuera de las audiencias para estudiar los antecedentes en que deben fundar sus sentencias; pero no se justifica para los empleados, ya que el trabajo relativo al ordenamiento de los expedientes, a la confección de oficios, etc... debe hacerse en las horas en que no se atiende público, por lo que estos deberían regirse por el horario ordinario a que están sometidos todos los funcionarios de la administración”.<sup>116</sup>

Por su parte, Rafael Retamal, en 1987, expresa que la Corte Suprema en uso de su atribución exclusiva ha dividido el trabajo de los tribunales en dos etapas, la primera para dedicarse a la atención del público, litigantes y abogados, y la segunda para pensar y redactar los fallos; “tan necesario —señala— es lo uno como lo otro y no es posible sacrificar el tiempo de pensar en provecho del tiempo de tramitar, porque no es preciso un exceso de agudeza para darse cuenta de que la actuación esencial de todo proceso es la sentencia”.<sup>117</sup>

### 3. 3. Casas para ministros y jueces

Uno de los problemas más graves que ha afectado a la judicatura es la falta de casas de habitación para los magistrados que prestan servicios, especialmente en lugares apartados del país.

Ya en 1967, Osvaldo Illanes señala lo dramático de la situación y la necesidad de buscar una solución inmediata, para la cual propone la participación de la Corporación de la Vivienda.

Reitera la crítica situación, Enrique Urrutia M., en 1974, solicitando medidas urgentes para una solución. Sin duda, la falta de un lugar digno para la residencia de los jueces afecta seriamente el interés por la judicatura.

### 3. 4. Previsión

Otro de los temas que han interesado especialmente a la judicatura es el otorgar a los magistrados una jubilación acorde con la importancia de

---

<sup>116</sup> Discurso Inaugural de 1975, *Diario Oficial*, de 14-3-1975, p. 7.

<sup>117</sup> Discurso Inaugural de 1987, *Diario Oficial*, de 14-3-1987, p. 11.

su función. En 1975, Enrique Urrutia M. manifiesta su preocupación por la situación precaria en que se encuentran las pensiones de jubilación de los funcionarios y empleados del Poder Judicial.

Dos años después, José María Eyzaguirre reitera su preocupación por el sistema de jubilación, que ocasiona que después de largos años de trabajo los miembros de la judicatura se encuentren en una situación de tanta precariedad que no les permite hacer frente a la vida con un mínimo de decencia. Igual idea reitera en 1978.<sup>118</sup>

### 3. 5. Montepío

Oswaldo Illanes, tanto en 1967 como en 1968, solicita la dictación de una ley que otorgue a las viudas de los miembros del Poder Judicial una pensión digna y suficiente.

### 3. 6. Funcionarios mujeres

En 1970, Ramiro Méndez analiza el tema del aumento que han experimentado las mujeres funcionarias judiciales. Sostiene que no existe diferencia alguna de capacidad entre hombres y mujeres; pero que la justicia podría verse perjudicada en su desempeño de alguna manera.<sup>119</sup>

---

<sup>118</sup> La ley 18.805, publicada en el *Diario Oficial*, de 17-6-1989, estableció una indemnización extraordinaria a los Ministros de la Corte Suprema mayores de 75 años que cesaran en sus cargos dentro de 90 días. El Ministro Luis Maldonado criticó en 1990 lo perentorio de dicho plazo para acogerse a retiro, puesto que podría prestarse para interpretaciones dudosas. A su vez, por la ley N° 19.121, publicada en el *Diario Oficial*, de 5-2-1992, se establece dicho beneficio para los Ministros y Fiscales de la Corte Suprema que ya hayan cumplido 70 años de edad, sin fijarse un plazo para el uso de dicho derecho

<sup>119</sup> En 1967, en el Escalafón Primario del Poder Judicial existía la siguiente relación funcionarios judiciales hombres y mujeres:

- a) 1era categoría: 14 hombres y ninguna mujer.
- 2da categoría: 79 hombres (97,5%) y 2 mujeres (2,5%)
- 3era categoría: 60 hombres (74%) y 21 mujeres (26%)
- 4ta categoría: 18 hombres (90%) y 2 mujeres (10%)
- 5ta categoría: 88 hombres (63,7%) y 50 mujeres (36,3%)
- En 1992 dicha situación varía sustantivamente:
- 1ra categoría: 18 hombres y ninguna mujer.
- 2da categoría: 124 hombres (80%) y 31 mujeres (20%)
- 3era categoría: 118 hombres (47,3%) y 131 mujeres (52,7%)

### 3. 7. Carrera judicial

Tanto en 1970, como en 1972, el Ministro Ramiro Méndez expresa la necesidad de que exista una carrera judicial. Esta debe empezar desde muy joven, para evitar que los interesados en la judicatura prefieran por razones económicas dedicarse al ejercicio profesional. A objeto de estimular el ingreso a la judicatura deben reducirse los plazos de ejercicio profesional para optar a cargos judiciales. Además deberían establecerse reglas claras de ascenso y límites de edad.

De esta manera, en opinión de la judicatura, debe ser preocupación fundamental el establecimiento de una carrera judicial.

### 3. 8. Ministros visitadores

El Ministro José María Eyzaguirre en todas sus intervenciones abogó por la necesidad de que los Ministros visitadores sean acuciosos en sus funciones y vigilen adecuadamente el desempeño de los empleados judiciales.

### 3. 9. Corporación Administrativa del Poder Judicial

Luis Maldonado señala, en 1989, la necesidad de crear una Corporación Administrativa del Poder Judicial, como una corporación de derecho público encargada de ejercer la administración de todos los recursos destinados al funcionamiento de los tribunales que integran el Poder Judicial.<sup>120</sup>

---

4ta categoría: 50 hombres (65,7%) y 26 mujeres (34,3%)

5ta categoría: 63 hombres (23,2%) y 209 mujeres (76,8%)

La 1era categoría incluye Ministros y Fiscales de la Corte Suprema; la 2da categoría Ministros y Fiscales de las Cortes de Apelaciones y Relatores y Secretarios de la Corte Suprema; la 3era categoría Jueces letrados de asiento de Corte y Relatores y Secretarios de Cortes de Apelaciones; la 4ta categoría Jueces letrados de capital de Provincia y Defensores Públicos de Santiago y Valparaíso, y la 5ta categoría Jueces letrados de comuna y Secretarios de Juzgados de Letras de asiento de Corte.

<sup>120</sup> Dicha Corporación fue creada por ley N° 18.969, publicada en el *Diario Oficial*, de 10-3-1990. La mencionada ley modificó el título XIV del Código Orgánico de Tribunales, estableciendo una Corporación Administrativa del Poder Judicial, órgano dotado de personalidad jurídica que dependerá de la Corte Suprema y cuya finalidad es administrar los recursos financieros, tecnológicos y materiales de la judicatura.

#### IV. LA JUDICATURA Y LOS GOBIERNOS DE TURNO

En excepcionalísimas ocasiones, la Corte Suprema, a través de sus Presidentes, ha hecho referencia a la situación política contingente y cuando ello ha ocurrido en general ha sido para defender el rol de la judicatura en el Estado de Derecho chileno.

##### 4. 1. La Corte Suprema y el gobierno de Allende

En 1972, Ramiro Méndez, frente a las críticas del gobierno de la época por una supuesta actitud antigobiernista de la Corte Suprema y a la actitud virulenta de cierta prensa gobiernista, señala: “No puedo aceptar y formulo mi más enérgica protesta por la pretensión de arrastrar a los integrantes del Poder Judicial a las violentas luchas de la política contingente”<sup>121</sup> y luego concluye “quienes servimos en la administración de justicia no queremos, ni podemos intervenir en la política contingente, porque afecta a la independencia y a la imparcialidad, sin las cuales desaparece toda idea de justicia”.<sup>122</sup>

Al año siguiente, Enrique Urrutia M. expresa que con el Poder Ejecutivo “se han mantenido relaciones normales”, no obstante las diversas reclamaciones de variada índole que han debido representar al mismo. Por su parte, las relaciones con el Legislativo las clasifica de “cordiales”.

Por último, el mismo Enrique Urrutia M., en su discurso de 1974, hace un análisis muy riguroso de la actuación del gobierno de Allende, en especial en todo lo tocante a la labor de la judicatura, a la animadversión de aquel en contra de esta última y a su falta de colaboración en la ejecución de las resoluciones judiciales.<sup>123</sup>

##### 4. 2. La Corte Suprema y el Pronunciamiento Militar de 1973

Enrique Urrutia M., en 1974 al referirse a los sucesos políticos vividos en 1973, consigna: “En verdad, el gobierno elegido en 1970, con sus desaciertos y su constante violación a la ley de manera tan manifiesta,

---

<sup>121</sup> Discurso Inaugural de 1972, *Revista de Derecho, Jurisprudencia y C. Sociales*, N° 69 (1972), p. XV.

<sup>122</sup> *Ibíd.*

<sup>123</sup> Sobre la crisis del gobierno de Allende, véase *Antecedentes histórico-jurídicos: Años 1972-1973* (Santiago de Chile: Ed. Jurídica, 1980).

tanto en su letra como en su espíritu, había perdido ya legitimidad obtenida con su elección por el Congreso Nacional, y, por el contrario, legimitaba así, a su vez, los sucesos ocurridos en el recordado once de septiembre”.<sup>124</sup> En la misma oportunidad afirma que el país vivía un verdadero estado de “guerra interior”.

En 1977, José María Eyzaguirre, al referirse a la dictación de las Actas Constitucionales, critica la amplitud de las facultades que se contemplan en el Acta N° 4 relativa a los regímenes de emergencia, particularmente por el abuso que futuras autoridades podrían hacer de él.

Un año después, el mismo Presidente hace referencia al plebiscito nacional efectuado en enero de dicho año, cuyo objetivo fue repudiar la intervención foránea en algunas materias propias de la soberanía nacional y en donde, además, se otorgó al gobierno su asentimiento para dotar al país de una nueva institucionalidad, consignando que esta última debería tomar en consideración la idiosincrasia nacional y sus costumbres.

### 4. 3. La Corte Suprema y “el retorno a la democracia”

En 1990, Luis Maldonado celebra el triunfo de la democracia como sistema político, deseando buen éxito al nuevo gobierno y esperando que sepa conducir al país “por el camino de la reconciliación, de la paz y de la verdad y para que la dignidad y derechos del hombre sean siempre los principios básicos que orienten el actuar de cada uno de los que llevarán sobre sus hombros la pesada responsabilidad que significa la dirección de la nación hacia el logro del bien común”.<sup>125</sup> Por último, en 1991, reitera su complacencia por “el retorno a la democracia”, señalando que “es imprescindible que cada uno de los poderes del Estado ocupe su espacio y ejerza sus funciones en el marco que la Constitución le entrega y que sea también controlado y supervisado en esta actividad por los otros poderes”.<sup>126</sup>

## CONCLUSIONES

Si bien las intervenciones efectuadas por los Presidentes de la Excelentísima Corte Suprema con motivo de la inauguración del año judi-

---

<sup>124</sup> Discurso Inaugural de 1974, *Diario Oficial*, de 14-3-1974, p. 8.

<sup>125</sup> Discurso Inaugural de 1990, *Diario Oficial*, de 14-3-1990, p. 15.

<sup>126</sup> Discurso Inaugural de 1991, *Diario Oficial*, de 14-3-1991, p. 15.

cial han sido realizadas a título personal y no comprometen la opinión del resto del cuerpo colegiado, no cabe duda alguna que de manera significativa representan el sentir de los miembros de los tribunales y corresponden a la voz de la judicatura.

Del presente estudio puede deducirse que, de acuerdo al pensamiento de los titulares del máximo tribunal, los males de la administración de justicia pueden superarse fundamentalmente con la decidida voluntad de la autoridad política de llevar a cabo las medidas propuestas por los jueces. De esta manera, factores externos influyen en la mejoría de la judicatura. Se pone especial énfasis en el aumento del número de tribunales —lo cual depende del Ejecutivo—, en la obtención de la autonomía económica y en la creación de una Policía Judicial y de una Escuela Judicial, sin perjuicio de la necesidad de realizar las reformas legales pertinentes a los diversos códigos y leyes, muchas de las cuales se han materializado —todo esto último de resorte del Ejecutivo y del Legislativo—. <sup>127</sup> En este sentido los últimos veinticinco años están marcados por la indiferencia de casi todos los gobiernos hacia los problemas reales de la justicia y por la admirable paciencia de los jueces en la espera de una solución efectiva a sus angustiantes y dramáticos problemas que pareciera no existe el menor interés en resolver.

En otro orden de cosas, debe resaltarse el hecho indesmentible de la independencia de la judicatura en relación a los demás poderes del Estado. Sus Presidentes, en diversos tonos y épocas, han reiterado dicha independencia, tanto jurídica como en su obrar y, a su vez, se ha destacado la no intromisión del Ejecutivo en asuntos judiciales, salvo excepcionalmente durante el período 1970-1973.

Por su parte, la judicatura ha entendido que todos los avances tecnológicos propios de la modernidad deben ser empleados como medios auxiliares que permitan al juez iluminar su criterio, pero en ningún caso deben reemplazar la labor esencial y propia del juez, cual es dictar sentencias, dándole a cada uno lo suyo. Cabe destacar, a su vez, que los jueces han limitado en general su órbita de actuación a aplicar sin más la ley a los casos concretos y han estimado que la justicia puede ser mejorada sólo si mejora la propia ley.

Por otro lado, debe consignarse la escasa aplicación práctica que ha tenido el Art. 5 del Código Civil, en cuanto a la posibilidad de señalarle al

---

<sup>127</sup> Reiterando la idea posición, el actual Presidente de la Corte Suprema, Marcos Aburto, ha señalado como causas de los atrasos en la justicia las siguientes: “Faltan tribunales, hay escasez de personal, bajas remuneraciones, lo que influye en la falta de interés de los abogados por ser jueces”, *El Mercurio*, 10-1-1993, D4.

Presidente de la República las dudas y dificultades en la inteligencia y aplicación de las leyes y los vacíos legales. Sobre esto último, hay que destacar que en el discurso pronunciado en 1992 por el Presidente Enrique Correa Labra, por primera vez se hace referencia a una ley en trámite —el proyecto de ley del gobierno del Presidente Aylwin sobre Consejo Nacional de la Magistratura—, hecho inédito y que constituye una interpretación amplia de la mencionada disposición, por cuanto se trata de un proyecto de ley, lo cual demuestra fehacientemente que los jueces no deben sentirse “reos” de la letra de la ley.

Por último, en cuanto a la labor de la Corte Suprema debe destacarse el aumento experimentado en materia de ingreso de recursos de queja, lo que ha transformado a dicho tribunal, en el hecho, en un tribunal de tercera instancia. A su vez, el máximo tribunal ha recibido un sobrecargo de trabajo notable; así, en 1966 prácticamente el total de las causas ingresadas eran falladas y en 1992 solamente la mitad.

#### ANEXO N° 1

##### Nómina de los Presidentes de la Corte Suprema (1967-1992)

Osvaldo Illanes Benítez: 1966-1969

Ramiro Méndez Brañas: 1969-1972

Enrique Urrutia Manzano: 1972-1975

José María Eyzaguirre: 1975-1978

Israel Bórquez Montero: 1978-1983

Rafael Retamal López: 1983-1988

Luis Maldonado Boggiano: 1988-1991

Enrique Correa Labra: 1991-1992

## ANEXO N° 2

## RESUMEN DE MATERIAS ABORDADAS EN LOS DISCURSOS INAUGURALES (1967-1992)

## Materials

(1967-1992)

[illegible]



[illegible]

## ANEXO N° 3

CUADRO N° 1      LABOR DE LA CORTE SUPREMA  
(1967-1992)

Año	Existencia anterior	Ingresos	Total	Fallos	Existencia pendiente
1967	552	1.674	2.226	1.583	643
1968	643	1.864	2.507	1.886	621
1969	621	1.761	2.382	1.840	542
1970	542	1.785	2.327	1.775	552
1971	552	1.784	2.336	1.557	579
1972	579	1.725	2.704	1.766	538
1973	538	1.867	2.405	1.822	583
1974	583	2.425	3.008	2.372	636
1975	636	2.592	3.228	2.356	872
1976	872	2.871	3.743	2.765	978
1977	978	2.442	3.420	2.388	1.032
1978	1.032	2.345	3.377	2.471	906
1979	906	2.374	3.280	2.225	1.055
1980	1.055	2.557	3.612	2.765	847
1981	847	2.805	3.652	2.863	789
1982	789	3.271	4.060	3.162	898
1983	898	3.995	4.893	3.882	1.011
1984	1.011	4.005	5.016	4.033	988
1985	991	4.281	5.272	4.011	1.261
1986	1.261	4.769	6.030	4.738	1.292
1987	1.292	4.903	6.195	4.951	1.244
1988	1.244	4.781	6.025	4.467	1.558
1989	1.558	4.708	6.266	3.621	2.645
1990	2.645	4.761	7.406	4.776	2.630
1991	2.630	5.430	8.060	3.970	4.090
1992	4.090	5.653	9.743	4.711	5.032

*Fuente:* Discurso inaugural del año judicial, en *Revista de Derecho, Jurisprudencia y C. Sociales*.

CUADRO N° 2            RECURSO DE APELACIÓN  
(1972-1992)

Año	CIVILES				PENALES			
	Existencia	Ingreso	Fallo	Ex. pend.	Existencia	Ingreso	Fallo	Ex. pend.
1972	28	176	179	25	9	68	72	5
1973	25	187	178	34	5	85	82	8
1974	34	194	178	50	8	203	188	23
1975	50	262	218	94	23	509	524	8
1976	94	272	279	87	8	382	362	28
1977	87	269	232	124	28	177	174	31
1978	124	279	290	113	31	131	127	35
1979	113	233	233	113	35	160	152	43
1980	113	303	336	80	43	230	232	41
1981	80	436	442	74	41	204	219	26
1982	74	527	512	89	26	221	219	28
1983	89	697	715	71	28	298	300	26
1984	71	845	821	95	26	366	350	42
1985	95	1.023	932	186	42	261	272	31
1986	186	1.168	1.139	215	31	356	346	42
1987	215	1.213	1.151	277	41	295	282	54
1988	277	1.126	1.121	282	54	281	253	82
1989	282	852	739	395	82	252	240	94
1990	395	804	898	301	94	240	274	60
1991	301	857	805	353	60	290	221	129
1992	353	1.021	1.015	359	129	263	251	141

*Fuente:* Discurso inaugural del año judicial, en *Revista de Derecho, Jurisprudencia y C. Sociales*.

CUADRO N° 3      RECURSO DE REVISIÓN  
(1972-1992)

Año	CIVILES				PENALES			
	Existencia	Ingreso	Fallo	Ex. pend.	Existencia	Ingreso	Fallo	Ex. pend.
1972	23	2	18	7	3	3	5	1
1973	7	4	0	11	1	3	3	1
1974	11	5	1	15	1	0	0	1
1975	15	2	1	16	1	0	0	1
1976	16	6	2	20	1	1	1	1
1977	20	2	12	10	1	5	5	1
1978	10	4	9	5	1	4	3	2
1979	5	4	1	8	2	1	1	2
1980	8	7	3	12	2	2	3	1
1981	12	3	1	14	1	2	1	2
1982	14	3	1	16	2	2	1	3
1983	16	11	10	17	3	4	4	3
1984	17	12	3	26	3	3	3	3
1985	26	10	2	34	3	13	6	10
1986	34	9	7	36	10	4	3	11
1987	36	18	15	39	11	2	2	11
1988	39	8	4	43	11	8	6	13
1989	43	9	7	45	13	6	2	17
1990	45	11	1	55	17	10	6	21
1991	55	12	5	62	21	9	4	26
1992	62	16	9	69	26	3	0	29

*Fuente:* Discurso inaugural del año judicial, en *Revista de Derecho, Jurisprudencia y C. Sociales*.

CUADRO N° 4      RECURSO DE CASACIÓN  
(1972-1992)

Año	Civiles			Fondo			Penales			Civiles			Forma			Penales		
	Exis- tencia	Ingreso	Fallo	Pendiente	Exis- tencia	Ingreso	Fallo	Pendiente	Exis- tencia	Ingreso	Fallo	Pendiente	Exis- tencia	Ingreso	Fallo	Pendiente		
1972	40	111	109	42	38	127	118	47	21	57	57	21	25	76	76	25		
1973	42	117	111	48	47	123	119	51	21	74	64	31	25	70	58	37		
1974	48	86	105	29	51	131	136	46	31	70	82	19	37	53	64	26		
1975	29	77	89	17	46	95	102	39	19	61	63	17	26	59	54	31		
1976	17	91	85	23	39	138	135	42	17	77	67	27	31	67	64	34		
1977	23	98	90	31	42	152	136	58	27	79	74	32	34	53	62	25		
1978	31	102	90	43	58	138	131	65	32	64	82	14	25	61	59	27		
1979	43	133	80	96	65	124	92	97	14	120	83	51	27	39	33	33		
1980	96	136	125	107	97	103	145	55	51	82	69	64	33	44	51	26		
1981	107	152	137	122	55	150	132	73	64	86	96	54	26	58	48	36		
1982	122	157	132	147	73	158	153	78	54	87	103	38	36	55	55	36		
1983	147	168	143	172	78	168	193	53	38	97	77	58	36	67	64	39		
1984	172	167	144	195	53	155	147	61	58	87	84	61	39	53	63	29		
1985	195	163	183	175	61	82	142	1	61	163	91	133	29	50	51	28		
1986	175	211	173	213	1	217	174	44	133	84	79	138	28	49	48	29		
1987	213	194	230	177	44	134	140	38	138	90	103	125	29	49	50	28		
1988	177	282	266	193	38	167	151	54	125	123	111	137	28	56	43	41		
1989	193	278	218	253	54	150	113	91	137	106	79	164	41	39	32	48		
1990	253	342	262	333	91	193	134	150	164	132	102	194	48	45	32	61		
1991	333	400	226	507	150	275	108	317	194	146	90	252	61	71	30	102		
1992	507	519	306	720	317	222	202	337	252	139	107	284	102	57	42	117		

Fuente: Discurso inaugural del año judicial, en *Revista de Derecho, Jurisprudencia y C. Sociales*.

CUADRO N° 5      RECURSOS DE QUEJA  
(1972-1992)

Año	Civiles			Criminales			Laborales		
	Existencia	Ingreso	Fallo	Pendiente	Existencia	Ingreso	Fallo	Ingreso	Pendiente
1972	113	311	308	116	69	240	232	387	374
1973	116	323	317	122	77	213	226	497	488
1974	122	384	373	133	64	201	187	821	824
1975	133	508	415	226	78	253	225	496	416
1976	226	555	569	212	106	330	308	705	670
1977	541	753	502	251	341	469	337	730	537
1978	251	548	578	221	132	274	318	470	479
1979	221	497	521	197	88	288	267	444	422
1980	197	589	630	156	109	340	390	417	468
1981	156	733	779	110	59	362	380	286	338
1982	110	903	896	117	41	449	424	426	356
1983	117	937	882	172	66	608	544	570	374
1984	172	956	1.000	128	130	549	575	446	502
1985	128	1.168	1.029	267	104	529	523	475	421
1986	267	1.180	1.234	213	110	593	576	490	594
1987	213	1.392	1.416	189	127	542	578	417	425
1988	189	1.367	1.173	383	91	569	538	365	402
1989	383	1.420	1.006	797	122	540	531	365	229
1990	797	1.557	1.622	773	311	684	680	374	410
1991	732	1.599	1.269	1.062	315	712	540	569	326
1992	1.062	1.554	1.361	1.255	487	709	653	507	357

Fuente: Discurso inaugural del año judicial, en *Revista de Derecho, Jurisprudencia y C. Sociales*.

CUADRO N° 6      RECURSOS DE INAPLICABILIDAD. (1972-1992)

Año	Existencia	Ingreso	Fallo	Pendiente
1972	21	20	29	12
1973	12	29	28	13
1974	13	83	48	48
1975	48	34	49	33
1976	33	16	12	37
1977	37	25	12	50
1978	50	21	25	46
1979	46	16	18	44
1980	44	7	21	30
1981	30	22	12	40
1982	40	19	14	45
1983	48	61	59	50*
1984	50	50	48	52*
1985	8	24	12	20
1986	20	28	10	38
1987	38	28	26	40
1988	62	40	59	43*
1989	43	43	34	52*
1990	52	48	33	67*
1991	57	54	7	104
1992	104	189	31	262

\* Incluye reclamaciones y otros asuntos.

Fuente: Discurso inaugural del año judicial, en *Revista de Derecho, Jurisprudencia y C. Sociales*.

GRÁFICO N° 1      LABOR DE LA CORTE SUPREMA 1966-1992

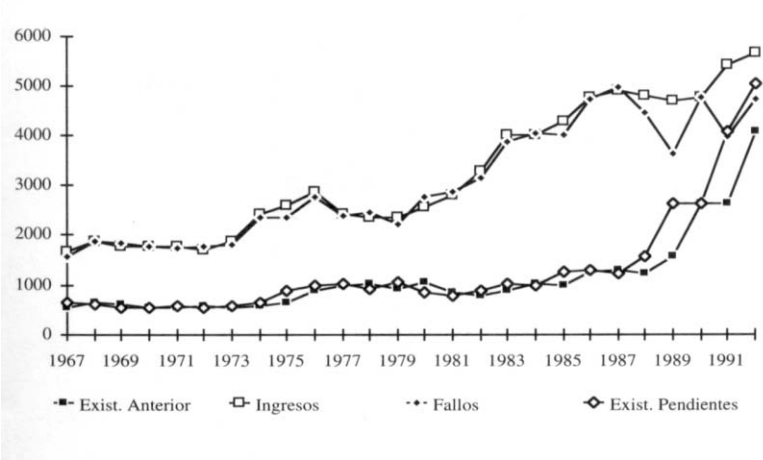


GRÁFICO N° 2      RELACIÓN DE INGRESOS CASACIÓN / QUEJA

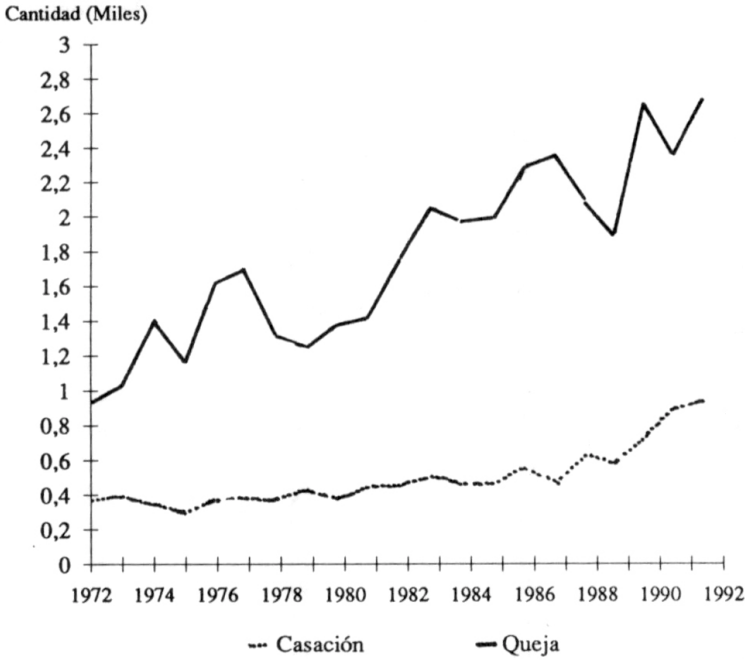


GRÁFICO N° 3      RELACIÓN DE INGRESO DE RECURSOS  
1972

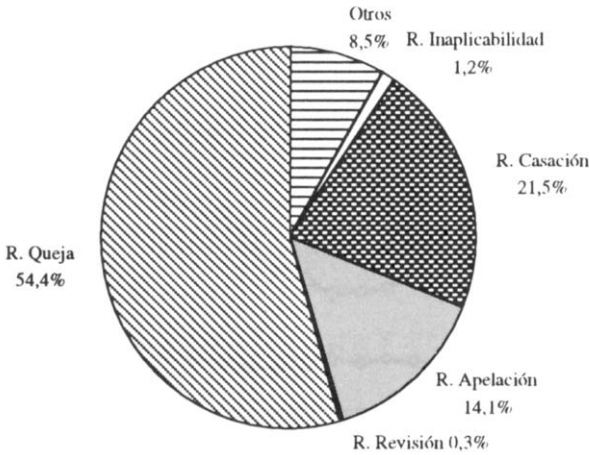




GRÁFICO N° 4      RELACIÓN DE INGRESO DE RECURSOS  
1992

